



REPÚBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

16^a REUNIÓN – 11^a SESIÓN ORDINARIA

3 DE OCTUBRE DE 2012

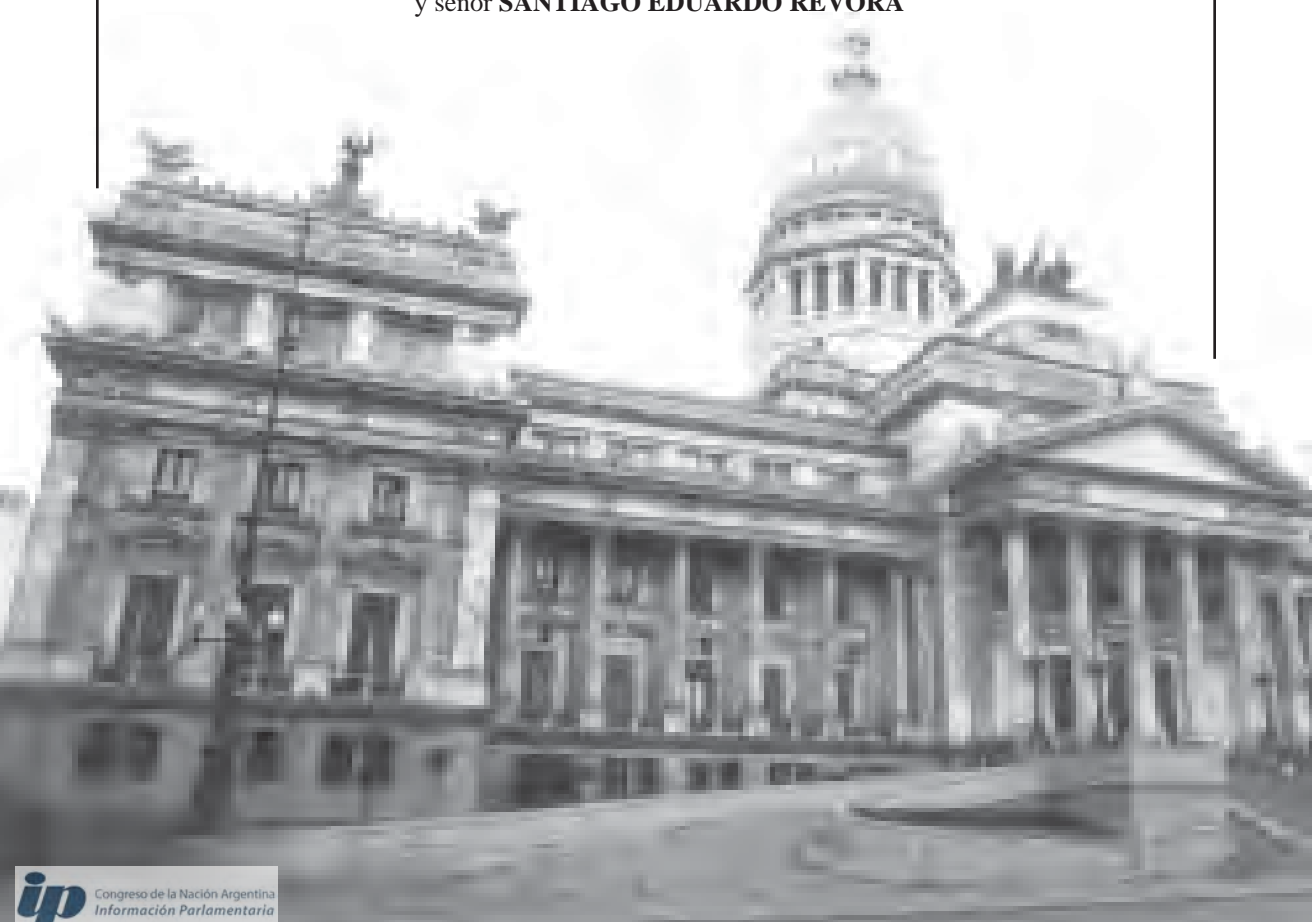
Presidencia del señor vicepresidente de la Nación, don **AMADO BOUDOU**,
y de la señora presidenta provisional del Honorable Senado, senadora **BEATRIZ
ROJKÉS DE ALPEROVICH**

Secretarios:

Señor **JUAN HÉCTOR ESTRADA** y señor **JUAN HORACIO ZABALETA**

Prosecretarios:

Señor **LUIS GUSTAVO BORSANI**, señor **MARIO DANIELE**
y señor **SANTIAGO EDUARDO RÉVORA**



PRESENTES:

AGUIRRE DE SORIA, Hilda C.
 ARTAZA, Eugenio J.
 BARRIONUEVO, Walter B.
 BASUALDO, Roberto G.
 BERMEJO, Rolando A.
 BIANCALANI, Fabio D.
 BLAS, Inés I.
 BONGIORNO, María José
 BORELLO, Marta T.
 CABANCHIK, Samuel M.
 CABRAL ARRECHEA, Salvador
 CANO, José M.
 CASTILLO, Oscar A.
 CIMADEVILLA, Mario J.
 COLAZO, Mario J.
 CORRADI DE BELTRÁN, Ana María
 CORREGIDO, Elena M.
 DE LA ROSA, María G.
 DI PERNA, Graciela A.
 DÍAZ, María Rosa
 ESCUDERO, Sonia M.
 ESTENSSORO, María E.
 ESTENSSORO, María E.
 FELLNER, Liliana B.
 FERNÁNDEZ, Aníbal D.
 FILMUS, Daniel F.
 FUENTES, Marcelo J.
 GIMÉNEZ, Sandra D.
 GIUSTINIANI, Rubén H.
 GODOY, Ruperto E.
 GONZÁLEZ, Pablo G.
 GUASTAVINO, Pedro G.
 GUINLE, Marcelo A.
 HIGONET, María de los Ángeles
 IRRAZÁBAL, Juan Manuel
 ITURREZ DE CAPPELLINI, Ada del Valle
 JUEZ, Luis A.

LABADO, María Esther
 LATORRE, Roxana I.
 LEGUIZAMÓN, María Laura
 LINARES, Jaime
 LUNA, Mirtha M. T.
 MANSILLA, Sergio F.
 MARINO, Juan C.
 MARTÍNEZ, Alfredo A.
 MAYANS, José M.
 MEABE, Josefina A.
 MONLLAU, Blanca M.
 MONTERO, Laura G.
 MORALES, Gerardo R.
 NEGRE DE ALONSO, Liliana T.
 NIKISCH, Roy A.
 PARRILLI, Nanci M.
 PÉREZ ALSINA, Juan A.
 PÉRSICO, Daniel R.
 PETCOFF NAIDENOFF, Luis C.
 PICHETTO, Miguel Á.
 RACHED, Emilio A.
 REUTEMANN, Carlos A.
 RIOFRIO, Marina R.
 RODRÍGUEZ SAÁ, Adolfo
 ROJKÉS de ALPEROVICH, Beatriz L.
 ROLDÁN, José M.
 RUIZ DÍAZ, Elsa B.
 SANZ, Ernesto R.
 VERA, Arturo
 VERNA, Carlos A.

AUSENTES, CON AVISO:

MENEM, Carlos S.
 MORANDINI, Norma E.
 ROMERO, Juan C.

LICENCIA POR ENFERMEDAD:

LORES, Horacio
 VERANI, Pablo
 LÓPEZ, Osvaldo R.

SUMARIO

1. **Izamiento de la bandera nacional.** (Pág. 5)
2. **Homenajes al senador (m. c.) Alcides López y al cineasta Octavio Getino.** (Pág. 5)
3. **Cuestión de privilegio.** (Pág. 6)
4. **Constitución de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.** (Pág. 7)
5. **Asuntos entrados. Mensaje solicitando acuerdo.** (Pág. 8)

6. **Destino de un predio en Santiago del Estero.** (S. – 3.338/12.) Moción de preferencia. (Pág. 8)
7. **Fertilización asistida.** (C.D. -28/12.) (Pág. 9)
8. **Convocatoria a la ministra de Seguridad.** (S.- 3.516/12.) Moción de preferencia. (Pág. 10)
9. **Consideración en conjunto de dictámenes de la Comisión de Acuerdos.** (Pág. 21)

Promover al grado inmediato superior a la teniente coronel odontóloga del Ejército Juana Ama Mauad de Fiorda. (O.D. N° 897/12.)

Institución de la distinción “Evita Compañera - Honorable Senado de la Nación”. (O.D. N° 985/12.)

Conmemoración del centenario de la creación de la Federación Agraria Argentina. (O.D. N° 989/12.)

XVII Fiesta Nacional del Ave Raza, en Rauch, provincia de Buenos Aires. (O.D. N° 996/12.)

11. **Reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.** (O.D. N° 1.041/12 y anexo.) (Pág. 34)
12. **Modificación del Código Penal. Incorporación de la figura del delito de femicidio.** (O.D. N° 983/12.) (Pág. 82)
13. **Apéndice.**

I. **Plan de labor.** (Pág. 101)

II. **Asuntos entrados.** (Pág. 105)

III. **Asuntos considerados y sanciones del Honorable Senado.** (Pág. 169)

IV. **Actas de votación.** (Pág. 758)

V. **Inserciones.** (Pág. 776)

—En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14 y 54 del miércoles 3 de octubre de 2012:

Sr. Presidente. — Queda abierta la sesión.

1

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. — Invito al señor senador por la provincia del Neuquén, Marcelo Fuentes, a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.

—Puestos de pie los presentes, el señor senador Fuentes procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (*Aplausos.*)

2

HOMENAJES AL SENADOR (M. C.) ALCIDES LÓPEZ Y AL CINEASTA OCTAVIO GETINO

Sr. Presidente. — En la reunión de labor parlamentaria celebrada en el día de ayer, se acordó rendir varios homenajes. Vamos a comenzar con el homenaje por el fallecimiento del senador nacional (m. c.) Alcides López.

Tiene la palabra el señor senador Vera.

Sr. Vera. — Señor presidente: el 12 de septiembre falleció en Entre Ríos quien fue senador nacional por mi provincia, de la Unión Cívica Radical, Alcides López. Nos sorprendió su fallecimiento. Se trata de una persona que transitó prácticamente toda su vida en la Unión Cívica Radical, fue un hombre de la política y de la función pública.

Brevemente, debo decir que, en una sociedad que mira bastante de reojo a la política y también a la función pública, el hecho de que López se haya dedicado a ellas con verdadera vocación merece, al menos de mi parte, un profundo reconocimiento y ponderación de lo que fue su paso por la función política, como expresión de una vocación, y por la función pública.

Por consiguiente, pido a mis pares el acompañamiento en este homenaje a quien fue una personalidad importante de la política radical en Entre Ríos y de la política en general.

Sr. Presidente. — Muchas gracias, senador.

Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: por supuesto, desde nuestro bloque revalorizamos siempre la trayectoria de un hombre político. En ese sentido, vamos a acompañar el homenaje que planteó el senador por Entre Ríos.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Fernández.

Sr. Fernández. — Señor presidente: hace unos cuantos años, allá por 1935, llegaba a la Argentina procedente de España, más precisamente de León, un cuadro político de envergadura, de esos que uno, cuando joven militante, lo miraba de lejos; y alguna vez, siendo jefe de Gabinete de Ministros de este país, me tocó tratarlo y conocerlo. No puedo decir que era un amigo sino un tipo cercano a los afectos, por la forma de ser.

Octavio Getino fue un formador del cine para la liberación, uno de los que creían que con el arte se podía hacer política y que, trabajando, puntualizando y fortaleciendo el esquema de la propia política, se podía llevar adelante un montón de otras estrategias, porque dentro de la discusión del arte estaba el compromiso con la política de lo social, con la política de los

queda vigente. No se deroga, pero queda con dos incisos.

Sr. Presidente. – Solamente 4 y 5.

Tiene la palabra el senador Morales.

Sr. Morales. – Está bien, porque había dicho el senador Aníbal Fernández que se mantenían el 4 y el 5, y no estaba en el texto. Entonces, ahora, se incorporan.

No me quiero meter, porque nosotros vamos a votar en contra. Pero ¿no van a derogar el 14, inciso 2, apartado b), y el 15, inciso 2, por lo menos, para estar en línea con la derogación del 19?

Sr. Pichetto. – No.

Sr. Presidente. – Entonces, propongo nuevamente que se haga una sola votación en general y en particular, dados los argumentos que se han ido exponiendo.

Primero, autorizamos las inserciones.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los pedidos de inserción.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobados.¹

Si ningún otro senador va a hacer uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola votación el proyecto en consideración.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 41 votos por la afirmativa y 19 por la negativa.

Sr. Presidente. – Señora senadora Leguizamón: manifieste su voto a viva voz.

Sra. Leguizamón. – Afirmativo.

Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, se registran 42 votos por la afirmativa y 19 por la negativa.

–El resultado de la votación surge del acta correspondiente.²

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.³

¹ Ver el Apéndice.

² Ver el Apéndice.

³ Ver el Apéndice.

12

O.D. Nº 983/12

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL. INCORPORACIÓN DE LA FIGURA DEL DELITO DE FEMICIDIO

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicité la palabra para ver si podemos acordar el tratamiento del delito de femicidio únicamente y, después, pasamos a un cuarto intermedio. Creo que no da para continuar con los otros temas.

Por nuestro bloque, va a hacer uso de la palabra el miembro informante, senador Guastavino y va a cerrar la senadora Riofrio.

También pedimos autorización para insertar y esperamos hacer un debate, en este tema, lo más rápido que se pueda.

Sr. Presidente. – Si hay acuerdo, ponemos el tema en consideración.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.

Hay una lista de oradores. Voy a pasar a leerla y, si no hay objeción, la cerramos ahí. Los oradores son los siguientes: Guastavino, Escudero, Negre de Alonso, Borello, Giustiniani, Morales y Riofrio.

Damos por cerrada esta lista.

Sr. Secretario (Estrada). – Se trata del dictamen de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de la Banca de la Mujer en distintos proyectos de ley de varios señores senadores y en el venido en revisión, por el que se modifica el Código Penal. Se aconseja aprobar otro proyecto de ley. Se trata de varios expedientes, incluido uno de la Cámara de Diputados –C.D.- 16/12–.

Sr. Presidente. – Para comenzar el debate, tiene la palabra el senador Guastavino.

Sr. Guastavino. – Como bien decía el secretario, el orden del día es el 983, que ha considerado el proyecto venido en revisión de la Cámara de Diputados y, además, los proyectos de ley presentados por distintos senadores y senadoras: las senadoras Sonia Escudero, Ana María Corradi de Beltrán, Fellner, Blanca Osuna (m. c.)...

–Murmillos en el recinto.

Sr. Presidente. – Por favor, silencio en el recinto, así podemos seguir el debate.

Sr. Guastavino. – De las senadoras María José Bongiorno, María de los Ángeles Higonet, Iturrez de Cappellini; de los senadores Carlos Saúl Menem y Ernesto Sanz; de las senadoras Marina Ríofrío y Graciela Di Perna; de los senadores Daniel Filmus y Horacio Lores; y de las senadoras Hilda Aguirre y Elena Corregido. También, hay un proyecto en el mismo sentido, que presentamos ante un aporte de una ONG, que llevaba mi firma y la de varios senadores de la comisión.

En la sesión del 14 de marzo de este año, en oportunidad de tratar la derogación del advenimiento en el Código Penal, todos los senadores hicimos el compromiso de avanzar en otros temas que tenían que ver con la protección de la mujer; más concretamente, lo que tiene que ver con lo que es conocido como femicidio.

Como sabemos, hoy por hoy no existe una definición unánime de femicidio. Se puede entender al femicidio como el asesinato de mujeres a título de resultado extremo de la violencia; el asesinato cometido como extremo de la violencia de aquel hombre que, quizás, se cree dueño de la mujer y puede someterla de tal manera que, inclusive, llega a determinar su asesinato.

Cuando empezamos a tratar este tema en la comisión, recibimos a representantes de la Consavig; más precisamente a su titular, doctora Prigoshin. También, recibimos a una representante de la Defensoría de la Nación y a integrantes de la ONG “La Casa del Encuentro”. Junto con los senadores de la comisión, estuvimos analizando y receptando las distintas opiniones de quienes estaban presentes, que habían venido a visitarnos, y de quienes tenían cosas para decirnos. La verdad que todos concluíamos en esa primera reunión era que, efectivamente, la sanción de la Cámara de Diputados, más allá de las excelentísimas intenciones de aquel proyecto, se quedaba a mitad de camino. Comienza a surgir, entonces, el consenso de que deberíamos ir más allá y establecer un artículo 80 bis que determinara como delito autónomo al femicidio.

Con posterioridad y como consecuencia de la reforma del reglamento de la Cámara, cuando se creó la Comisión de la Banca de la Mujer y se le dio la posibilidad de emitir dictamen, también se le giró para su tratamiento estos

proyectos de ley a la Comisión de la Banca de la Mujer, con la cual comenzamos a trabajar en forma mancomunada –diría yo–, porque hubo reuniones de los asesores de las dos comisiones que trabajaron fuertemente en este tema.

En verdad, no ha sido fácil llegar a este proyecto que hoy estamos tratando que, entre otras cosas, en su artículo 80 bis marca al femicidio como delito autónomo. Digo que no ha sido fácil porque, efectivamente –esto hay que decirlo y tenemos que compartirlo–, en el marco del debate, ha habido una abierta oposición de importantes sectores de la doctrina penal que indican que, en realidad, el delito de femicidio se considera inexistente como tal; además, que bien puede encuadrarse dentro de lo que el actual artículo 80 del Código Penal hoy marca como delitos de homicidios agravados.

Algunos creen conveniente que el femicidio como tal no exista como delito autónomo. Algunos de los que me visitaron en mi despacho para darme su opinión, inclusive, planteaban que ellos no creían que pudiera existir gente que ande por la calle buscando matar a una mujer por el solo hecho de ser mujer. De hecho, no han sido pocas las voces de la doctrina penal que se han opuesto a este proyecto que hoy estamos tratando aquí. Entonces, en realidad: ¿por qué nos decidimos a avanzar en la incorporación del artículo 80 bis y al delito de femicidio como un delito autónomo? Lo hacemos, primero, porque determinar el delito autónomo de femicidio es prácticamente como reconocer la problemática y, también, darle visibilidad.

La categoría teórica del femicidio ha surgido justamente para hacer visibles y nombrar de una manera específica a un amplio conjunto de mujeres que hasta ahora engrosan una lista indeterminada de quienes han sido asesinadas por violencia de género, han sido asesinadas como extrema violencia de género. También, porque significa una herramienta muy importante para la investigación y la acción política. Entendemos que la tipificación como delito autónomo va a contribuir a garantizar la debida persecución del delito con directivas estatales claras, concretas y precisas.

Pero aquí también somos conscientes y tenemos que sincerar el debate y el discurso: sabemos que no necesariamente, a partir de introducir esta modificación y de incorporar en

el artículo 80 bis el femicidio como un delito autónomo, vamos a lograr que disminuya este tipo de acciones espantosas. Digo esto porque, en realidad, en la mayoría de las propuestas que nos han hecho y preocupaciones que nos han planteado quienes forman parte de las distintas organizaciones que vienen reclamando una respuesta legislativa a esta situación, también nos dicen que la principal preocupación es que no haya un sistema judicial que verdaderamente acompañe las inquietudes legislativas que existen en este sentido. De hecho, ha habido una innumerable cantidad de casos en los que se ha planteado de manera clara una aplicación discriminatoria y prejuiciosa de la normativa ya existente.

Hay fallos que, en principio, me han causado sorpresa, en los cuales los jueces, ante hechos que terminan con la muerte por asesinato con violencia extrema de la mujer, han establecido condenas por homicidio preterintencional por concluir que, en realidad, no había existido intención de matar, sólo, de lesionar. Esto, obviamente, ha generado que las condenas se establecieran en ese marco de homicidio preterintencional. En consecuencia, como suele decirse, los homicidas la han sacado barata.

También he leído fallos de tribunales donde los jueces han planteado la celopatía de hombre, que hacía prever esta situación: o sea, si venía amenazando, la iba a terminar matando. Entonces, ¿cómo no se tomaron las previsiones del caso ante ese anuncio que venía haciendo el asesino, en función de su patología identificada como celopatía? Creo que esto es realmente insólito. Estas sentencias han generado mucha indignación y preocupación y ponen de manifiesto que si efectivamente no implementamos decisiones legislativas como ésta, si la Justicia, que tiene que jugar su rol, no acompaña este tipo de resoluciones del Congreso en función de hacer un aporte a una situación tan tremenda, será difícil avanzar para solucionar esta problemática.

Hay muchos ejemplos sobre esta cuestión. Por ejemplo, uno de los fallos más resonantes y emblemáticos fue el de Marisel Zambrano, una joven de veintiocho años a la que asesinaron a golpes. El autor fue Juan Manuel Alejandro Zerda, quien resultó condenado por homicidio preterintencional y sentenciado sólo a cinco

años de prisión efectiva por asesinar a su esposa y madre de su hija. Pero lo más insólito es que este hombre hoy –después de cumplir sus cinco años de sentencia– está pidiendo la tenencia de su hija, a la cual dejó llorando al lado del cadáver de su madre. Entonces, como digo, no basta con establecer reformas en el Código en este sentido, si no tenemos una Justicia que empiece a mirar estas cosas de la manera en que es necesario hacerlo.

También puedo recordar el caso muy conocido de Wanda Taddei: el hombre fue condenado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y la alevosía, pero el tribunal, para no darle la condena máxima –que era lo que debería ocurrir– incluye el atenuante de que obró en emoción violenta y le redujo la condena a dieciocho años. Esto, a pesar de que, en realidad, ni siquiera había presentado esa defensa, la que siempre sostuvo que el hombre era inocente y jamás argumentó la existencia de la emoción violenta.

De tal modo que son importantes todas esas cosas. Primero, este aporte legislativo que hacemos a pesar de que hay un amplio sector de la doctrina penal que no lo comparte, con argumentos de alguna solidez y que uno respeta; sobre todo, aquellos que, como yo, no somos abogados, pero miramos con mucha atención a quienes lo son y nos consta que son estudiosos de la doctrina penal.

Sin embargo, a pesar de esto que hemos tomado como un aporte importante, decidimos avanzar en la “visibilización” del delito como tal: efectivamente, este delito existe y tiene nombre y apellido. Toda esa categoría de mujeres que han sido asesinadas y que, como decía, integran una indeterminada lista de casos de violencia hoy cobran vida a partir de este delito que hoy las identifica.

Es conocida la única modificación que hemos hecho: en el actual inciso 1 del artículo 80, se dice que agrava el homicidio con prisión perpetua cuando el hecho fuera cometido contra el cónyuge. Con la presente reforma, lo que hemos agregado es “al cónyuge, conviviente y ex conviviente...”, equiparando de esta manera a quienes han formalizado el vínculo con aquellos que no lo han formalizado y también, en línea o en tono con la reciente reforma del

Código Civil, en el sentido de contemplar nuevas formas de familias.

—Ocupa la Presidencia la señora presidenta provisional del Honorable Senado, senadora doña Beatriz Rojkés de Alperovich.

Sr. Guastavino. — Otra reforma que no queremos que pase desapercibida por su importancia es la que estamos realizando en el inciso 4 del artículo 80, donde agregamos a los homicidios cometidos por odio a la orientación sexual y a la identidad de género. En una sociedad que ha avanzado en lo que es la legislación civil, reconociendo derechos como han sido el matrimonio igualitario y la identidad de género, creemos que también deberíamos establecer en el mismo tono de la modificación que se ha producido a través de las leyes que hemos sancionado en el Congreso, en cuanto al reconocimiento de derechos, otros cambios para que esta iniciativa se ajuste también a lo que se establece en el Código Penal.

Asimismo, incorporamos en el inciso 11 el denominado homicidio vinculado, que es el homicidio de otra persona con el fin de causar sufrimiento a una persona con la que ha mantenido una relación afectiva. En este sentido, podemos mencionar el caso Cuello, donde un hombre secuestró y mató al hijo de su ex pareja para mortificar a la madre del niño. Al poco tiempo sucedió un caso más aberrante aún, como fue el caso Cruz, donde la propia madre mató a su hijo para vengarse del padre.

Como una última propuesta, se le excluye al juez la posibilidad de atenuar la pena cuando el homicida tuviera un historial de violencia contra la mujer. Esto limita al juez la posibilidad de reducir penas para los casos de violencia de género.

En definitiva, aun cuando dicen que no está probado que la tipificación del femicidio sea una herramienta efectiva para reducir el número de homicidios provocado por la violencia contra las mujeres, también es cierto que ninguna tipificación de ningún delito es garantía para que no se cometan delitos. Hemos tenido, a lo largo de la historia del Congreso, muchas discusiones sobre aumentos de penas y demás y sabemos que eso sólo no garantiza que los delitos no se cometan, sino que esto tiene que ver con que se determinen políticas en el Poder Legislativo

—con leyes que apunten en ese sentido—, con que se fijen políticas de Estado y con que el Poder Judicial juegue el rol que le corresponde.

Quiero cerrar ejemplificando lo que es el femicidio con un caso real que sucedió en La Plata, pero que se replica de manera idéntica en muchas provincias de nuestro país. Mariana Condorí tenía 20 años y era madre de tres hijos. Vivía en pareja con Gabriel Maldonado desde hacía un año y medio, aproximadamente. Tenían una hija en común. Maldonado ejercía sobre su mujer Mariana todo tipo de violencia, tanto física como psicológica. Ejercía violencia sobre los hijos de ella, que no eran de él.

El 7 de marzo de 2012, Mariana llega a la casa de sus padres luego de ser brutalmente golpeada por su pareja. Tal era el estado en el que llegó la joven que los padres la convencen de ir a hacer la denuncia policial a la comisaría. Sus padres la llevan a la comisaría, donde la atienden, pero no tienen en cuenta otros hechos similares que había padecido Mariana; es decir, haber sido golpeada por su marido. Entonces, la mandan a hacerse ver en el hospital y le indican que vuelva con un certificado médico en el que conste cuáles fueron las lesiones que le había propinado este hombre. Como Mariana no tenía recursos para ir hasta el hospital no fue, y el fiscal que recibió la denuncia, en contra de la normativa local e internacional, propuso iniciar un proceso de mediación con el victimario. El 13 de marzo le llega la notificación a Mariana, y el 14 de marzo fue hallada muerta por ahorcamiento en su casa. Como último insulto a la víctima y a sus deudos, la causa tramita en la misma unidad fiscal que nunca la escuchó.

Para terminar, y obviamente pidiendo que se apruebe esta modificación —y debo decir que el dictamen ha sido firmado casi por unanimidad—, vuelvo a mencionar que, a sabiendas de que este tipo de modificaciones no son garantía de que resolvamos la cuestión y a que demos una respuesta definitiva al tema, es necesario que esto también sea acompañado por el Poder Judicial, el que debe reconocer que ha tenido fallos que realmente marcan con absoluta claridad que ha tenido un sentido muy discriminatorio hacia la mujer.

Como dije hace un momento, yo he quedado sorprendido por la innumerable cantidad de fallos en donde queda claramente expuesto que

hay una actitud discriminatoria hacia la mujer, que quizás tendrá que ver con otras cuestiones y otros análisis, culturales y demás, pero marca a las claras que el Poder Judicial tiene que mirar con objetividad esto y debe actuar en consecuencia, para que de esta manera podamos no solamente avanzar en dar una respuesta legislativa a este terrible delito que es el femicidio y una respuesta a las mujeres y al recuerdo de las mujeres asesinadas por violencia de género sino también avanzar en ver de qué manera podemos lograr que esto vaya desapareciendo.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.

Sra. Escudero. – Obviamente, estamos ante un momento en el que hay un gran consenso social en que en la Argentina tenemos un problema sistémico, estructural, donde las mujeres son asesinadas por el hecho de ser mujeres.

No hay estadísticas oficiales de femicidios y eso es una muestra más del maltrato; o sea, son muchos pero ni siquiera hay una estadística oficial. La única estadística con la que contamos es la que hace el Observatorio de Femicidios de La Casa del Encuentro, una ONG que trabaja solamente con los femicidios que se conocen a través de la prensa. O sea que, obviamente, hay un subregistro, porque lo que no llega a la prensa no se está registrando.

En 2010 hubo 126 femicidios; en 2011 hubo 152 y los primeros 6 meses de 2012, hubo 119. Si sigue esa misma proyección, llegaremos a 238 femicidios en este año. Quiere decir que este año, cada 3 días, 2 mujeres fueron asesinadas por violencia de género. En 7 de cada 10 casos, el agresor fue su marido o su ex pareja. En 16 de estos casos, las víctimas habían denunciado violencia con anterioridad.

Este tema viene con un enorme consenso legislativo, como dice el senador Guastavino, no solamente por el expediente que viene de la Cámara de Diputados, sino también por diecisiete proyectos presentados en esta Cámara por distintos senadores y senadoras.

La última reunión del año pasado de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales fue justamente para empezar este debate. Este año hubo dos reuniones de senadores y ocho de asesores, en un esfuerzo por lograr una redacción que fuera satisfactoria.

Por otro lado, quiero hacer un reconocimiento a lo que fue el protagonismo de la Banca de la Mujer en este tema, involucrándose también en el debate de la comisión para hacer ese último esfuerzo de lograr la tipificación como delito autónomo, que es lo que nos diferencia de la sanción de Diputados, y por eso este tema volverá a esa Cámara.

En la sanción de la Cámara de Diputados se utilizó el mismo artículo 80 que hoy existe en el Código, de homicidio agravado, para, en un inciso, colocar el femicidio. En cambio, con la aprobación que haremos hoy, estableceremos un artículo 80 bis como delito autónomo, para que quede absolutamente claro que el bien jurídico protegido es la vida de la mujer, y así decirlo con todas las palabras. Será, finalmente, el reconocimiento de esta situación sociocultural de opresión de las mujeres en cuanto a estereotipos que las reducen a categorías al servicio del varón.

Si por razones culturales, sociales, religiosas, etcétera, se consideró que la mujer había sido creada de una costilla de Adán –“no es bueno que el hombre esté sólo”–, entonces creamos una mujer para que lo acompañe, para que lo sirva, para que le cocine, para que le dé placer. Y cuando la mujer no cumple con las expectativas del hombre, bueno, se la somete a un castigo, se hace merecedora de un castigo y, en su versión más extrema, la mata; la mata. ¿Y la mató por qué? Bueno, porque es natural. Se puso nervioso, no cumplió sus expectativas, se portó mal; y en un exceso de emoción no quiso matarla, pero la mató. Entonces, la pena se reduce a pocos años porque actuó bajo emoción violenta.

Esta mirada, tan alienante para las mujeres, fue internalizada por las propias mujeres durante muchos años, y ése es el gran esfuerzo de cambio cultural que estamos dando.

Por eso, éste es un paso de un cambio cultural importantísimo. En la segunda mitad del siglo pasado dimos pasos jurídicos impresionantes: a nivel internacional, con la CEDAW y su protocolo facultativo, y con la Convención de Belém do Pará; a nivel nacional, con el cupo femenino, con la ley de protección contra la violencia familiar y, finalmente, con la ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Esto no quiere decir que todos los varones están contra las mujeres. Hay que decir que muchísimos varones están contribuyendo enormemente a este cambio cultural y que también, debemos reconocerlo, hay muchas mujeres que no están comprometidas justamente con esta lucha de género.

Nuestra cultura sigue impregnada de machismo, y por eso tenemos que seguir trabajando firmemente. El machismo se muestra en su forma más burda con los chistes de mal gusto. En una reunión de la Banca de la Mujer, la senadora Corregido nos recordaba cómo una revista muy conocida daba consejos de cómo pegarle a una mujer y que no se note. Ese es el machismo en su forma burda; y en su forma más terrible, obviamente, naturaliza la violencia contra la mujer: le pega, la mata.

Para la conducta del femicida, la vida de la mujer está condicionada al cumplimiento de las expectativas del varón. El varón la considera parte de su patrimonio. Entonces, cuando la mujer incumple sus expectativas, la castiga.

Hoy estamos avanzando para ver qué podemos hacer desde el derecho penal justamente para desarraigar este prejuicio de género. El derecho penal expresa cuáles son las conductas que el legislador, como representante de la sociedad, considera intolerables. Por lo tanto, al asesinato de mujeres en el ámbito de la violencia de género hoy el Congreso, los representantes de la sociedad y la propia sociedad lo considera una conducta intolerable. En consecuencia, queremos que se responda con la mayor dureza jurídica posible. ¿Cuál es? Prisión perpetua de cumplimiento efectivo. Cómo no acordar, entonces, que es necesaria la tipificación específica como delito donde queda claro que protegemos la vida de las mujeres. Justamente, lo que muestran las estadísticas es que aquí hay un problema de asesinato de mujeres. No es un tema neutro, de asesinato del conviviente o del cónyuge. Aquí hay un problema que viene con una carga cultural de muchos siglos.

El dictamen, como dijo el senador Guastavino, excede el tema del femicidio. No solamente avanzamos con eso, sino que también al cónyuge le agregamos conviviente, ex cónyuge y ex conviviente.

Se avanzó también en el tema de matar por odio sexual. El inciso 4 en su actual redacción

dice: por placer, codicia, odio racial o religioso. Y aquí se le agrega: odio a la orientación sexual o a la identidad de género, o su expresión. En la ley de identidad de género nosotros definimos perfectamente la diferencia entre identidad de género y orientación sexual. Son dos situaciones diferentes y las contemplamos específicamente.

En cuanto a la tipificación del femicidio decimos: el hombre que matare a una mujer o a una persona que se autoperciba con identidad de género femenino y mediere violencia de género. ¿Qué significa violencia de género? En nuestra legislación, en nuestro derecho, está perfectamente definido qué se entiende por violencia de género, tanto en la ley 26.485, de protección integral justamente para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, como en la que aprueba la Convención de Belém do Pará. O sea que el tipo está absolutamente claro y específico.

Este femicidio que estamos tipificando como tal, incluye al femicidio íntimo, es decir, en el ámbito de una relación íntima, y al femicidio sexual, cuando se tiene una relación sexual o se la quiere tener; pero no está limitado a esos dos tipos, sino que se da siempre que mediere violencia de género, sea femicidio íntimo, sexual u otro tipo.

Incorporamos también el párrafo final del artículo 80, referente a que las circunstancias extraordinarias de atenuación –esto es la emoción violenta, por ejemplo– no se aplicarán a quien anteriormente haya realizado actos de violencia de género. Rechazamos el abaratamiento punitivo en los casos en que haya habido denuncias de violencia de género, ya sea contra la mujer víctima, contra otras mujeres o contra otras personas. Al violento no le vamos a dar el beneficio de la emoción violenta o de las circunstancias extraordinarias de atenuación.

Quiero hacer una invocación a todos los jueces penales del país: que sean absolutamente restrictivos a la hora de aceptar la defensa de emoción violenta, porque lo único que vino haciendo esa defensa es convalidar esta noción de que las mujeres somos un bien disponible para los varones, a merced de sus deseos o de sus impulsos.

Esto ha sido perfectamente reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González y otras, Campo algodónero

contra México, por el asesinato de mujeres en Ciudad Juárez, mostrando cómo los estereotipos de género sostenidos muchas veces por los propios Estados, las propias legislaciones y las propias sociedades son justamente causa y consecuencia de esta violencia contra las mujeres, que en su expresión extrema se materializa con este asesinato de mujeres por el hecho de ser tales y por no cumplir las expectativas de los varones.

El femicidio es un hecho abyecto, nunca un mero exceso respecto de un supuesto orden natural de las cosas. Las mujeres no hemos sido creadas para satisfacer las expectativas de los varones. Los derechos de mujeres y varones están en un pie de igualdad. Y con esta modificación al Código Penal queremos así reconocerlo.

Quiero también reconocer que en mi provincia el índice de femicidios es altísimo y uno de los casos más emblemáticos en estos últimos tiempos ha sido obviamente el asesinato de las dos turistas francesas, asesinato que está todavía sin aclarar, cuya investigación llevó al supuesto suicidio del jefe de la brigada de investigaciones y por el que están detenidos algunos, respecto de los cuales los datos genéticos no coinciden para nada. O sea, hago aquí un homenaje a todas las víctimas de femicidio en la República Argentina.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. — Señora presidenta: por supuesto, adhiero a lo expresado por la miembro informante del interbloque. Simplemente quiero hacer algunas reflexiones. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado en este caso? Indudablemente que es la vida de la mujer. Dentro del Código Penal los delitos contra la vida son los que están en el primer capítulo. O sea, es toda una definición del valor adoptado por el legislador en su momento. Asimismo, comparto lo que dijo el miembro informante en el sentido de que la modificación de las penas no va a llevar a la solución de este delito. O sea, tendremos que trabajar en la prevención, que es el objetivo fundamental que debemos perseguir.

En el mes de agosto de 2011, en *Página/12*, hubo un reportaje que le hicieron al doctor Iñigo Ortiz, que es experto en violencia de género, y él ya se refería a esto. Decía que era contrario

a la tipificación autónoma de femicidio. Tanto por razones de principio como por la más que dudosa eficacia que tendría su regulación autónoma, puede incluso tener efectos negativos. También un catedrático muy importante de derecho penal español, Mir Puig, ha dicho que en realidad aumentar las penas no sirve para nada, pero en algo hay que avanzar.

¿Por qué digo esto? Lamento que no se haya tenido en cuenta porque esto se podría haber completado con el agravamiento en el caso de las amenazas, que era uno de los proyectos que yo había presentado, que es la prevención. Y que además le da una herramienta muy importante al juez frente a la amenaza para tomar medidas preventivas.

El miembro informante explicó bien que no es la solución. Simplemente quiero señalar algunos casos. En 2002 aprobamos la ley 25.601 referida al agravamiento de las penas por el homicidio de miembros de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, los casos han seguido aumentando y desde el año pasado hasta hoy aumentó un 35 por ciento. O sea, no obstante el agravamiento sigue creciendo. Lo mismo sucedió con la ley antisequestros que aprobamos antes de que mataran a Axel Blumberg.

Esto sucede porque en realidad el delincuente no va a mirar el Código Penal para ver cuál es el tipo de pena que tiene el delito. El homicidio tiene una pena de ocho a veinticinco años. Lo más importante de todo esto es la prevención: es decir que se logre concientizar al agresor en el sentido de que este tipo de delitos tienen penas fuertes y no son inocuos. Es decir, que no van a evadir el castigo como sucede en el caso de los hurtos o robos, donde hay una conciencia de que nunca lo van a agarrar o que entra por un lado y sale por otro. Se tiene que crear esta cultura, lo que algunos llaman “el mensaje”.

Como mencionó el senador Guastavino es fundamental el protagonismo del Poder Judicial, o sea, con qué criterio se posiciona el juez frente a esa situación, y ahí viene lo que se llama el mensaje. Entonces, el mensaje que claramente tiene que llegarle al sujeto a quien va destinada la norma es que la Justicia actuará con rigurosidad frente a estos hechos.

Finalmente, quiero hacer otro agregado, relacionado con el femicidio y los medios de comunicación. En la III Jornada de Periodismo y

de Género, realizada en junio por la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina, se llegó a la conclusión de que la publicidad de este tipo de delitos –que implican situaciones aberrantes– por parte de los medios de comunicación instiga a la imitación. Esto también fue informado por la senadora Escudero, quien puso el ejemplo de que “como está de moda, te prendo fuego”, “como está de moda, te mato”. Además, como Eduardo Vázquez es encarcelado por quemar a su esposa, pero después sale libremente, circula por las calles y participa en actos políticos tocando con una banda, es un ejemplo nefasto el que se le está dando a la sociedad. ¿Por qué menciono esta jornada? Porque el tema fue estudiado por mujeres jueces especialistas en el tema.

Además, hay un estudio español publicado por el *European Journal of Public Health*, de 2009, en el que el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alicante analizó si los casos de publicidad de los femicidios aumentaba o no la cantidad de este tipo de delitos. Y quedó probado que aumenta hasta un 42 por ciento la cantidad de femicidios cuando los medios de comunicación dan a publicidad y permanentemente insisten sobre ese delito.

En consecuencia, acompañaré este proyecto de ley. Sin embargo, considero que agravar el delito de amenazas es un elemento importante para la prevención. En ese sentido, el proyecto que presenté –que lleva el número 1.417/12– dice: “Modifícase el artículo 149 bis del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente forma: será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que hiciere uso de amenazas para intimidar o amedrentar a una o más personas. En este caso, la pena será de 1 a 3 años de prisión si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas. La pena será de 3 a 5 años de prisión cuando las amenazas fueren contra una mujer por su condición de tal.

Efectivamente, como dijeron la senadora Escudero y el miembro informante, el senador Guastavino, la Casa del Encuentro es una institución privada que tiene un observatorio de femicidio. Pero la Procuración General de la Nación, por resolución 54/11, ordenó realizar un análisis de los femicidios para establecer una estadística. En mi caso, la mandé pedir por nota

y la tengo en mi poder. Se trata de un control sobre la base de las denuncias que ellos tienen en su ámbito, el cual sirvió para elaborar una estadística respecto de los femicidios.

Tenemos el caso de México, al que ha hecho referencia la senadora Escudero, y por último quiero mencionar el tema que surgió a partir de la reunión entre el representante de Irán y el canciller de la República Argentina. Lamentablemente, la Argentina ha iniciado relaciones con un país cuyo dictador se encarga de hacer lapidar a las mujeres. O sea que hoy estamos sancionando esta norma y, lamentablemente, también tendríamos que estar repudiando que queramos tener relaciones, como dijo Pilar Rahola, una defensora de los derechos de la comunidad judía en la Argentina –y me refiero exclusivamente a las palabras de ella, que cito textualmente, porque me impactaron mucho–, con un dictador que está usando las muertes en la Argentina pero, fundamentalmente, usando y abusando de las mujeres a través de la lapidación y delitos aberrantes en nombre del Estado.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la senadora Borello.

Sra. Borello. – Señora presidenta: en realidad, creo que estamos tratando un tema muy sensible, por referirnos exclusivamente a lo que significa el golpear, violar y maltratar a una mujer, con el agravante de que no tenemos el material suficiente para tomar conciencia de la gravedad de lo que ello implica.

Coincido plenamente con las expresiones vertidas en este recinto. No voy a ahondar en la parte jurídica, porque coincido y estoy de acuerdo con la reforma del artículo 80 y también estoy de acuerdo con todas las manifestaciones hechas con anterioridad.

Cuando hablamos de estadísticas yo quisiera preguntar el porqué. Creo que va de la mano con una situación social, muñida de pobreza, inseguridad; una cuestión social que implica falta de confianza, violencia excesiva, que influye en las familias y que trae como consecuencia una cantidad de femicidios de cuya cifra no tenemos conocimiento exacto, pero sabemos, por ejemplo, que mi provincia está tercera en este tema.

Esta semana hemos tenido una reunión, que ya fue mencionada por la senadora Escudero, con Fabiana Tuñez, responsable de la Casa del

Encuentro. El senador Martínez y la senadora Morandini nos acompañaron. Nos dio realmente una clase instructiva y terrible acerca de algunas estadísticas que ellas manejan, que son –diría yo– hasta aberrantes porque no solamente hablaba de estadísticas de femicidio hacia mujeres mayores, sino que hablaba también de una estadística con respecto a niños. Eso era lo terrible. Entonces, surgió –en este sentido, ya estoy trabajando en el tema– la necesidad de tomar la ley 26.485 y estudiar cuáles son los artículos que no están reglamentados. O sea, creo que aquí hay una labor a nivel Ejecutivo nacional, que debe reglamentar ciertos artículos que coinciden con las carencias para aquellas mujeres que son golpeadas y maltratadas, y no cuentan con la normativa suficiente que las contenga.

¿A qué hago referencia? A la no existencia o a la poca existencia, por no decir nada –sobre todo en las provincias y ciudades más pequeñas– de refugios, hogares de día que contengan a estas mujeres o niños, que son castigados y que, después de ser castigados por su esposos, por sus hermanos, es decir, por el hombre en general –que se considera que tiene más fuerza–, después de hacer su denuncia, no saben adónde ir.

Entonces, en este momento falta la intervención del Estado nacional en la reglamentación de ciertos y determinados artículos de la importante ley que he mencionado, que es la 26.485 que, justamente, es la ley de protección integral de las mujeres, para que de esta manera podamos lograr una política de Estado que haga una labor conjunta. Es decir, tenemos la ley, tenemos la legislación. ¿Qué nos hace falta ahora? Nos hace falta el presupuesto, la puesta en práctica para tratar que esa estadística, que a nosotros nos parece terrible, poco a poco podamos bajarla.

Estoy de acuerdo con el miembro informante, el senador Guastavino, cuando él dijo que, quizás, con lo que esta noche vamos a sancionar, no tengamos la solución definitiva. Estoy muy de acuerdo con ello. Yo creo que una simple reforma al Código no va a solucionar de un día para el otro el problema de la mujer y del femicidio.

Lo que sí tenemos que hacer es un trabajo conjunto con políticas de Estado fuertes más la labor de toda estas organizaciones que están trabajando de una manera anónima y con un esfuerzo extraordinario, recorriendo el país sin

tener los medios para poder transmitir lo que ellas conocen y la posibilidad de poder reformar o trabajar todos juntos para que este flagelo que tiene la sociedad pueda ir mermando hasta lograr un día, no digo la solución definitiva, pero sí la valoración que realmente debe tener la mujer en la sociedad a fin de igualarla –que es lo que nos falta quizás– en cuanto a derechos, garantías y atribuciones.

Voy a hacer un comentario y quizás después pueda tener alguna cuestión en mi contra. Pero no me gustó que se levantaran tantos senadores y que no escucharan un tema tan importante como es éste, porque si bien no es una cuestión que pueda generar una pelea entre nosotros es un tema del cual todos los funcionarios y quienes fuimos elegidos por el pueblo tenemos que estar conscientes de que nuestra labor es mejorar situaciones y, en este caso, situaciones graves que afectan a mujeres y niños. Por eso, cuando entren los senadores, si me permiten la palabra un segundito, se los voy a decir directamente a la cara, porque no me gusta hablar cuando las personas no están presentes.

Todo esto que acabo de expresar es un paso importante, pero tenemos que seguir trabajando.

En la Banca de la Mujer consideramos que es importante que este tema no se pierda. Desde la relación de las mujeres con las organizaciones intermedias es importante que no se pierda; es más, tenemos que incentivarla y promocionarla y creo que de nosotros como representantes no sólo de las mujeres y de los niños sino también de los hombres de la República Argentina, debemos demostrar que tenemos la capacidad para legislar, y el gobierno nacional tiene que demostrar su capacidad –que yo creo que la tiene– para poder implementar políticas de Estado que vayan acorde al mejoramiento de este flagelo social como es el femicidio.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la senadora Higonet.

Sra. Negre de Alonso. – ¿Me concede la palabra para una aclaración?

Sra. Higonet. – Sí, senadora.

Sra. Negre de Alonso. – No quería interrumpir a la senadora por Córdoba, pero quiero agregar que también falta reglamentar el artículo 9º, inciso k), de la ley 26.485, por el

que se crea el registro interjurisdiccional, respecto del cual no está establecida la función. Entonces, por eso, estamos prácticamente manejándonos con estadísticas privadas en cuanto a lo que ha hecho la Procuración y es importante que el inciso se reglamente para que se pueda poner en funcionamiento.

Sra. Higonet. – Señora presidente: sin duda, estamos tratando un tema muy fuerte, muy sensible, y, la verdad, se necesitaba que le diéramos este tratamiento hoy.

Eso no significa que no nos estábamos ocupando. Por eso hablaba el miembro informante de la cantidad de proyectos que estaban presentados en el Senado. Justamente, soy autora de uno de ellos. Y va mi reconocimiento al miembro informante. No sólo por la seriedad y responsabilidad con que nos ha presentado el tema, sino por ser hombre. Porque generalmente pasa que quienes hablamos de estos temas somos, en su mayoría, mujeres. Hasta este momento venimos hablando cuatro mujeres, y la mayoría de los proyectos han sido presentados por mujeres.

Considero que la violencia de género es una absoluta violación a los derechos humanos y uno de los principales obstáculos que no nos permite vivir en situaciones de igualdad y en plena democracia.

Evidentemente, esta violencia ha anclado en una desigualdad estructural de poder que existe entre el hombre y la mujer, favorecida por patrones socioculturales que generan esta situación de desigualdad económica y material del hombre, con una situación de vulnerabilidad y de fragilidad de la mujer.

Es cierto que la ley 26.485 ha significado un gran avance, una verdadera herramienta de transformación en este camino, porque nos ha permitido identificar, definir, dos tipos de violencia, así como también las modalidades más brutales que conocemos en las formas de violencia.

Por eso se hace necesaria una normativa punitiva específica. Esto es un poco lo que se ha debatido: si tipificar en el Código Penal, establecer este delito de manera autónoma, darle el nombre de “femicidio”, es decir, que deje de ser un delito pasional. Porque el análisis era si estábamos resguardando un bien jurídico distinto

al de las otras figuras penales. Y consideramos que sí, porque acá tiene un componente más que es esta discriminación, esta condición de subordinación a la que se encuentra sometida la mujer que es producto del femicidio.

Es cierto que la palabra femicidio, haciendo un poco de historia, fue usada por primera vez por la escritora estadounidense Carol Orlock en 1974, y fue utilizada públicamente en 1976 por Diana Russell ante el Tribunal de los Crímenes contra las Mujeres, en Bruselas.

En el derecho internacional tenemos muchos antecedentes, algunos de los cuales han sido utilizados como herramientas en todo este camino de luchas que vienen haciendo las mujeres.

Es así que, por ejemplo, en la Declaración del Milenio, quedan determinados valores fundamentales que son esenciales para las relaciones internacionales del siglo XXI, y, precisamente, en referencia a la igualdad, afirma que debe garantizarse la igualdad de derecho y de oportunidades de hombres y mujeres en un paso hacia la igualdad real.

El 9 de junio de 1994, la Asamblea General de la OEA adopta la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es la conocida como la Convención de Belém do Pará. Ella establece numerosas obligaciones para los Estados; sobre todo, establecer mecanismos judiciales y administrativos para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación. Tomo esta convención porque, en uno de los últimos fallos dictados hace muy pocos días sobre esta cuestión, el último 8 de agosto, se condenó a Javier Weber, de 53 años, a veintiún años de prisión por intentar matar a su ex mujer, Corina Fernández, a quien esperó a la salida del colegio de los chicos y le tiró dos tiros. Ella se salvó, y sus balas las tiene como recuerdo de esta historia.

En ese caso, uno de los jueces a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 9, el doctor Fernando Ramírez, quien ya en otro antecedente había aplicado la perspectiva de género, manifestó lo siguiente: no cabe duda de que la muerte de una mujer a consecuencia de la violencia de género constituye una categoría sociológica claramente distinguible y que ha adquirido especificidad normativa a partir de la

Convención de Belém do Pará. No hay razón, en consecuencia, para no darle nombre y, en tal sentido, cabe señalar que la conducta de Javier Weber constituye un intento de femicidio.

Remarco estas palabras porque como contracara tenemos justamente en estos días, en la provincia de La Pampa, el juicio a uno de los jueces que dio lugar a la figura del avenimiento que posibilitó la posterior muerte de Carla Figueroa, debido precisamente a la falta de una perspectiva de género en la Justicia.

También en América hay muchos antecedentes, por suerte, en donde se ha avanzado en la tipificación de los delitos contra las mujeres.

Si analizamos las estadísticas y los números, ya algunos fueron señalados por las senadoras que me precedieron en el uso de la palabra. El Observatorio de Femicidios de la Argentina, organización que nos permite tener datos concretos —a falta de estadísticas oficiales—, realiza un trabajo muy serio y nos recuerda que cada tres días, lamentablemente, mueren dos mujeres, y de los 119 femicidios que ya se produjeron durante este año, en 59 hechos el presunto asesino fue el esposo; y en 24, su ex pareja.

Por su parte, las formas más graves y más violentas de muerte son quemar, acuchillar, etcétera. Pero ¿para qué vamos a ahondar en esto? Lo concreto es que las estadísticas muestran, que de esos 119 femicidios, 34 ocurrieron en la vivienda compartida con el femicida, y 25, en la de la víctima, lo que significa que la propia casa puede resultar más peligrosa que la vía.

Creo que la aprobación de este proyecto constituye un gran paso. Quiero agradecer la participación que ha tenido la doctora Perla Prigoshin, quien ha venido a presentar un muy valioso aporte y una mirada particular y comprometida sobre este tema.

Es cierto que hay mucho por hacer. De lo contrario, no estaríamos viendo el video que tuvo que filmar esa mujer de Merlo ante su reclamo no escuchado por nadie sobre la violencia que viene sufriendo hace tanto tiempo; ni el video que exhibió la señora de Bahía Blanca y que tuvo que grabar para que pudiéramos ver la violencia a la que era sometida. Ella había hecho muchas denuncias, pero no había sido escuchada. Entonces, seguro que hay mucho para hacer. Éste es el gran compromiso que tenemos, cada

uno desde el lugar que le corresponde, en este trabajo, para lograr esta sociedad más justa, para conseguir esta igualdad, para este camino y para esta permanente conquista de derechos para las mujeres. Pero hoy estamos dando uno que no deja de ser importante con la aprobación de este proyecto de ley.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). — Tiene la palabra la señora senadora Díaz.

Sra. Díaz. — Señora presidenta: el proyecto de ley que estamos tratando modifica el artículo 80 del Código Penal e impone la pena de reclusión perpetua e imposibilidad de atenuación a quien matare por cuestiones de violencia, odio e identidad de género.

Las cifras que manejamos son las que nos han aportado las diferentes organizaciones sociales que desde hace muchísimos años vienen trabajando en este tema. Como siempre, debo destacar que cada vez que nos referimos al tema, en el marco de reconocimiento de derechos, los aportes que hacen las organizaciones sociales a lo largo y ancho del país son inmejorables. En verdad, para nosotros son un insumo sumamente necesario a la hora de tomar cualquier tipo de decisión legislativa.

Estas cifras que nos muestran las organizaciones indican un alarmante crecimiento del femicidio. Una de las tantas estadísticas señala que 231 muertes se produjeron en el año 2009; 260, en 2010 y 282, en 2011.

Si bien en el proyecto no se incorpora la palabra femicidio, sí se incorpora su concepto. Esto es importante porque necesitamos romper la práctica de la violencia sexista como disciplinadora de la sociedad.

Con este proyecto de ley buscamos desnaturalizar todo mecanismo de violencia que, generalmente, queda encerrado en el ámbito de lo privado. Me parece que, si bien hay algunos avances importantes respecto del proyecto de la Cámara de Diputados, se mantiene su espíritu. Lo más importante es seguir haciendo visible este tipo de violencia que se ejerce contra las mujeres por su condición de tales.

Se han modificado algunos incisos: en el inciso 1 se incorporan las figuras de conviviente, ex conviviente y de pareja. En el inciso 11 no se permite la atenuación de la pena para quienes tuvieran antecedentes de actos de violencia

de género. Y se agrega el artículo 80 bis, que regula la prisión perpetua para quien matare a una mujer o persona que se autoperciba con la identidad de género femenino y mediere violencia de género.

¿Qué nos parece destacable del tratamiento de este tema? La innumerable cantidad de proyectos presentados por los senadores y senadoras, así como los aportes que acercaron las distintas organizaciones, la Defensoría y las especialistas de Consavig.

Leyendo la versión taquigráfica de lo que dijo la especialista de Consavig, creemos que todavía nos falta avanzar en lo que respecta al tema del femicidio en cuanto a lo que tiene que ser la resolución sobre los temas de la patria potestad, la curatela y la reparación a las víctimas.

Me parece que es digno destacar que en este Congreso hemos avanzado en la sanción de diversas leyes para alcanzar la igualdad de trato entre los géneros hombre-mujer y erradicar todo tipo de violencia de género, así como la importancia que tuvo la derogación de la figura del avenimiento, a punto tal que ya estamos a punto de presenciar que va a comenzar el *jury* de enjuiciamiento al juez de La Pampa.

Consideramos que se ha producido un cambio de paradigma y por eso nos estamos permitiendo tratar estos temas.

No quiero dejar de resaltar la necesidad y la importancia de la capacitación y la sensibilización de todo el Poder Judicial, destacando la labor que están llevando adelante –sobre todo las juezas– con la apertura de la agencia que tiene cobertura durante las 24 horas los fines de semana para hacer este tipo de denuncias; y también quiero resaltar la tarea que están llevando adelante en los diversos poderes judiciales de las provincias, donde se están acercando con capacitación, sobre todo a aquellos funcionarios que tienen que ver en la resolución de estos casos.

Nos parece que hay que profundizar sobre otros vínculos, como noviazgos de parejas. Yo no soy abogada, pero me parece que hay algunas cuestiones de puntilliosidad penal que por ahí nos están dificultando algunas de estas cuestiones.

Como dije antes, nos queda pendiente, sobre todo, avanzar sobre los derechos parentales de los violentos y qué ocurre con sus hijos.

Creemos que esta ley es perfectible y que podríamos avanzar, pero siempre tenemos la oportunidad de hacerlo.

Consideramos que el fortalecer la ley que ya sancionamos sobre prevención y erradicación de violencia contra las mujeres no sólo con recursos económicos, sino también con recursos humanos nos permitiría trabajar sobre la prevención, porque en este caso estamos trabajando sobre hechos consumados.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador Fernández.

Sr. Fernández. – En primer lugar, quiero hacer una aclaración.

En las sesiones que son tan largas, por razones más que obvias, es imperioso que en dos o tres oportunidades uno se retire del recinto. No estoy dispuesto a ponerme una sonda, señora presidenta, por lo cual, si no he estado circunstancialmente es porque no he podido. (*Risas.*)

Haciendo las aclaraciones del caso, parece que la importancia de lo que estamos discutiendo en este momento es superlativa.

Coincido con lo que dice el presidente de la comisión, el senador Guastavino, en cuanto a que ampliar la pena de determinado tipo no cambiará absolutamente nada; lo que sí permite es hacer de eso un punto de partida para un cambio trascendental en términos culturales, y ése es el ejemplo más fuerte que estamos teniendo a partir de la sanción que vamos a dar el día de hoy.

Si uno hace un análisis a partir de todo el siglo XX, se va a dar cuenta de que en 1903 se sancionó la ley 4.189, que es la que sanciona el Código Penal, de Carlos Tejedor, y establecía pena de muerte para quien matara a padres, hijos o cónyuges sabiendo que lo eran. La última pena de muerte fue el 22 de julio de 1916, en el caso de Carlos Frank Livingston, donde las autoras intelectuales fueron su esposa y la señora que trabajaba en la casa, y los autores materiales fueron dos pescadores calabreses que vivían en la zona de La Boca y que fueron fusilados en la Penitenciaría Nacional.

Con la reforma de 1921 –con la 11.179, de Rodolfo Moreno, paradójicamente dos gobernadores de la provincia de Buenos Aires–, se agrega el actual artículo 80, que hace referencia

a ascendientes o descendientes de cónyuges sabiendo que lo son.

Esta modificación que se está haciendo pone un punto gráfico, porque por medio de ella se está reconociendo otro tipo de calidades de formación de familia, que es lo que está haciendo el Código Civil que estamos tratando en este momento. Por eso dice “cónyuge o ex cónyuge”, pero también dice “conviviente o ex conviviente”; da otras características a la tipología que permiten ampliar más el radio en términos de la discusión de la que estamos hablando. Porque, por más que se quiera minimizar, es inexorable que aparece la copia o la imitación a este tipo de acciones cuando de por medio hay alguien que es más frágil, que es vulnerable y que siempre termina siendo el lesionado en estos términos.

Hace 160 años, Federico Engels decía que el último esclavo en liberarse sería la mujer. Y lo que estaba definiendo es, con toda la gráfica, la situación que estamos discutiendo hoy.

Entonces, con este punto, con el artículo 80 bis definiendo específicamente un tipo y con la modificación del artículo 80, inciso 4 –que habla del odio, de las posibilidades de la violencia de género y, por ende, de provocar la muerte o acciones de esa característica–, daremos un marco de referencia, no más que eso, para que los jueces hagan lo suyo; pero un marco de referencia al cual nosotros debemos transformarlo en un trampolín y multiplicarlo todos los días.

¿Quién se imaginaba a los jugadores del fútbol argentino levantando una tarjeta roja y diciendo “tarjeta roja al agresor”? ¿Se lo imaginaron? Nunca. Eso es un avance de todos los que están trabajando diariamente en este tema.

Por lo tanto, lo que estamos haciendo hoy, además de tipificar el delito y de darle las herramientas a quienes tienen que juzgar –esperando que realmente hagan lo que tienen que hacer, con profundidad, para que las conclusiones sean las sanciones sin ningún tipo de cortapisa y con el máximo de la seriedad que este tema requiere, a fin de evitar que estas situaciones se vuelvan a repetir y de que no haya opciones para que queden cosas ahí, medio colgadas entre hilitos, para que no se cumpla con lo que se debe cumplir–, nos da el pie a todos los que tenemos la responsabilidad de ser multiplicadores del tema, de llevarlo a cada uno de los ámbitos y de poner las barbas en remojo de los responsables de la

violencia, que es lo más fuerte que podemos generar en este asunto.

Mi intención en este caso es no minimizar el tema. Ciertamente, con el cambio de tipo o profundizando las penas en determinados tipos no hacemos absolutamente nada. La realidad está en que, a partir de la acción que se está llevando a la práctica y con todos los involucrados en este asunto, podemos multiplicarlo, de manera tal de prevenir muchísimos de los casos.

Ahí estaremos ganando una parte muy importante de la batalla.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Señor senador: sin lugar a dudas, la “visibilización” del tema creo que es lo más importante que estamos logrando ahora.

Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. – Gracias, presidenta, por su aporte.

Me parece que la participación de las mujeres en el Congreso de la Nación y la importancia creciente que ello ha tenido en los últimos años –y es una expresión tenerla a usted como presidenta– habla de que han sido y son protagonistas de leyes que significan un avance del progreso social.

Nos rebela la indefensión de las mujeres y muchas veces el desamparo de las mujeres y de sus hijos cuando un hombre amenaza sus vidas o las de sus seres queridos.

Y pese a las denuncias y al pedido de ayuda de las víctimas, se produce inexorable, como en una tragedia griega, el desenlace final: la muerte de la mujer. Todos los días las noticias nos golpean con esa terrible realidad.

Por eso, desde el Frente Amplio Progresista acompañamos esta modificación del Código Penal, que, además de achicar los márgenes de impunidad en los casos concretos, esperamos, en primer término, tenga un efecto simbólico sobre el sistema de Justicia y, luego, fundamentalmente en la sociedad en su conjunto.

El primer paso es darle visibilidad a estos temas, para abordarlos con toda responsabilidad y encontrar las soluciones.

Se ha dicho muchas veces que la modificación del Código Penal no es una política pública. No podemos considerar a la modificación del Código Penal como una política pública. La política pública es otra cosa: es lo que reclamamos

y está establecido en la ley nacional 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. En este aspecto es fundamental que las políticas públicas se expresen desde los municipios, desde los gobiernos provinciales y desde la Nación.

En nuestro caso, como legislador nacional he planteado un pedido de informes. Vuelvo a puntualizar los aspectos centrales que me parecen importantes.

En primer lugar, quiero decir que la ley 26.485 que sancionamos el 11 de marzo de 2009 no tuvo presupuesto en sus tres primeros años. En el presupuesto 2012 recién se asigna una partida sólo para personal y no tiene para otros gastos. Entonces, planteo que la ley en materia de asistencia técnica, capacitación permanente, campañas de difusión y articulación con todas las otras áreas del Estado nacional para “transversalizar” la perspectiva de género es lo que todavía está pendiente.

En segundo lugar, esta ley tiene todo un título sobre políticas públicas que se divide en tres capítulos, donde se establecen los principios rectores, el organismo competente y los lineamientos de políticas estatales. Lo tenemos que releer. Es muy importante la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Su artículo 10 dice: “... El Estado nacional deberá promover y fortalecer interinstitucionalmente a las distintas jurisdicciones para la creación e implementación de servicios integrales de asistencia a las mujeres que padecen violencia y a las personas que la ejercen...”. Y decíamos que no es solamente desde el ámbito nacional, sino que las provincias también tienen que propender a la creación de servicios.

Los números de femicidios que están citados en la mayoría de los proyectos que se presentaron y fueron planteados en esta sesión esta noche salen de organizaciones no gubernamentales. Casi no tenemos datos oficiales. En la página web del Consejo Nacional de la Mujer figura creado el Observatorio Nacional de Violencia contra las Mujeres, con la misión –dice textualmente– de “desarrollar un sistema de información permanente que brinde insumos para el diseño, implementación y gestión de políticas públicas tendientes a la prevención

y erradicación de la violencia contra las mujeres”. Además de esto que está escrito, hay que practicarlo. Y hace quince días se anunció un convenio con el INDEC para empezar a tener datos oficiales. Damos la bienvenida a la noticia, pero evidentemente hay que hacerlo y hasta el momento no se ha hecho.

Por otra parte, el programa “Las víctimas contra las violencias”, pese a ser nacional, con importante recurso especializado, sólo atiende en Buenos Aires. Desde este recinto federal planteamos por qué no se extiende a todas las provincias.

Y otro punto que queríamos marcar es que la ley establece la existencia de una línea de emergencia gratuita en todo el país, la cual todavía no está funcionando.

Estos son los aspectos que nos parecen fundamentales. Porque la realidad nos muestra las escalofriantes noticias sobre la saña y la crueldad con que siguen muriendo mujeres víctimas de la violencia de género. Y esto, como muy bien dijo el miembro informante, senador Fernández, no se para con el Código Penal, se revierte con políticas públicas tangibles, sostenidas en el tiempo; con verdaderas políticas de Estado.

Para que estos brutales homicidios ocurran tienen que darse las condiciones propicias. La urgencia, entonces, es trabajar sobre estas condiciones para modificarlas.

Mientras las mujeres no sepan qué derecho les asiste y no haya lugares al alcance de todas las argentinas donde reclamar el cumplimiento de esos derechos sin que les digan que se vuelvan a sus casas, sin que les pregunten qué hicieron o cómo estaban vestidas y sin que las devuelvan a sus explotadores, mal se puede esperar que se revierta la situación del femicidio en la Argentina.

Por eso, el real objetivo que a todas y todos aquí nos preocupa es revertir el número de mujeres muertas por el hecho de ser mujeres. Y que la prevención no se hace con el Código Penal sino con un compromiso político de todos los sectores y a todos los niveles con los presupuestos necesarios. Ese es el desafío que sigue pendiente, al cual, quizás, el debate que estamos realizando esta noche por el femicidio pueda contribuir.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Amado Boudou.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. — Señor presidente: además de los argumentos que ha vertido la senadora Borello, quiero reafirmar la posición de nuestro bloque a favor de este proyecto de ley y ratificar nuestra convicción en esta lucha cultural que venimos dando desde el Congreso hace bastante tiempo. Al respecto, la senadora Escudero ha mencionado algunas normas que dan cuenta de todo el entramado jurídico en términos de un sistema de prevención y sanción que venimos abordando.

Asimismo, el Protocolo Facultativo de la CEDAW generó un debate importante y estableció normas operativas. Al respecto, en cierto momento, vamos a tener que “pisar la pelota” para ver de qué manera se están cumpliendo efectivamente. Por otra parte, la cuestión del avenimiento, respecto de la ley 26.485, sobre la que ha hecho eje el senador Giustiniani, me parece que es un punto importante porque aborda justamente la temática de la prevención. Todos estos son temas sobre los que no estamos bien. Es decir, llegamos mal a este momento que es muy importante.

Por otra parte, festejamos que pudimos lograr modificar el Código con un texto mejor del que ha venido de la Cámara de Diputados, ya que hemos generado la figura de un delito autónomo con el artículo 80 bis. Me parece que le aportamos al proyecto de la Cámara de Diputados un texto que, aunque se ha demorado un poquito el debate aquí, lo mejora. Como decía el miembro informante y también el senador Aníbal Fernández, la modificación de esta ley no resuelve el problema por sí mismo pero sí nos permite avanzar en esta batalla cultural para lograr la visibilidad del tema y la pérdida de neutralidad. Desde ese punto de vista me parece que hoy estamos haciendo un gran aporte.

Reitero, llegamos mal a este momento porque recién se han planteado algunos datos estadísticos de organizaciones sociales, que son las que están trabajando en esta tarea de prevención y, ante la ausencia de datos oficiales, las cifras dan cuenta de que hubo un crecimiento, entre 2010 y 2011, de un promedio del 75 por ciento de

casos de femicidio. Por otro lado, están mutando en cuanto a la forma: los casos se están dando cada vez con más crueldad. Me refiero a la forma en que se están produciendo este tipo de delitos. Me parece que esto nos tiene que hacer reflexionar respecto de cuáles son las materias pendientes que tenemos.

Hasta aquí no se está cumpliendo acabadamente la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales que, justamente, es la otra pata. Dentro de lo que es el sistema normativo, es una de las patas más importantes que tiene que ver con la prevención. En eso, estamos fallando como sociedad.

Inclusive, cuando se hizo una presentación en el Comité Nacional de la UCR estuvimos hablando sobre la necesidad de la declaración de emergencia respecto de la violencia de género. Tal vez, deberíamos discutir este tema para ponernos en sintonía y para generar un abordaje y tutelar el cumplimiento de las distintas leyes que tenemos en la materia. Es decir, para que no tengamos solamente que estar en la última fase de la sanción cuando el delito se ha cometido. Muchas veces, como aquí se ha dicho, llegamos demasiado tarde.

Este proyecto es, realmente, un gran avance, y por eso lo acompañaremos decididamente. Este texto mejora el proyecto sancionado por la Cámara de Diputados, en cuanto a lograr la visibilidad para sacar de la neutralidad a este tipo de delitos. Por lo tanto, reitero, apoyaremos el proyecto en consideración.

También, en la reunión de labor parlamentaria, adelanté que iba a pedir el tratamiento sobre tablas de un proyecto de declaración que creo que podría ayudar a ganar esta batalla cultural. Me refiero a un proyecto de declaración elaborado por la diputada María Luisa Storani que dice lo siguiente: “Vería con agrado que la Asociación del Fútbol Argentino denomine al recientemente iniciado Campeonato de Primera B Nacional ‘Wanda Taddei contra la violencia en todas sus manifestaciones y ámbitos’”.

Nos parece que esta batalla cultural tiene que ver con la modificación del Código y con imponer pautas culturales que sirvan para ir generando la conciencia de que se trata de un flagelo, de que hay una sociedad machista y

de que es un delito que debe tener una tipificación autónoma y la máxima rigurosidad en las penas. Por lo tanto, me parece que yendo por este camino y cumpliendo con todas las leyes lograremos este cambio cultural.

Para finalizar, con convicción adelante nuestro voto favorable a este proyecto –en buena hora logramos este texto– y propongo que luego de la votación tratemos el proyecto de declaración que mencioné.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Riofrio.

Sra. Riofrio. – Señor presidente: lejos de ser una ventaja, el hecho de terminar o de cerrar este tema cuesta un poco porque se han dicho y reiterado muchos conceptos. Eso, en realidad, es bueno; habla de que coincidimos en un tema tan grave. Por lo tanto, voy a reestructurar el mensaje para no caer en reiteraciones.

Si bien la reforma que estamos introduciendo al Código Penal no consigna explícitamente la palabra “femicidio” –no hubo acuerdo para ello–, en cuanto al término de nuestro artículo 80 bis, la prensa y la sociedad mañana dirán que la Argentina ha sancionado la ley de femicidio. Este crimen aberrante tendrá su nombre. Tanto es así que hoy todos lo mencionamos como femicidio. Este es un crimen que necesitaba un nombre y hoy se lo estamos dando.

El asesinato de mujeres se ha convertido en un tema central de la agenda de los organismos internacionales pero, también, y eso es lo bueno, de los Estados. Por lo tanto, no quiero dejar pasar esta oportunidad para agradecer el aporte de aquellos organismos y organizaciones que participaron y colaboraron del debate. Con algunos coincidimos y con otros no, pero todos enriquecieron la discusión. Entonces, vaya mi agradecimiento a la Consavig y, en especial, a su coordinadora, la doctora Perla Prigoshin; a la defensora general de la Nación; a la Comisión de Género de la Defensoría General de la Nación; a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 38 de la Capital Federal; a la directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género; a Fabiana Tuñez, quien fue mencionada en esta sesión y es la coordinadora general de la Asociación Civil “La Casa del Encuentro”, que realmente hace un trabajo muy importante y, seguramente, en mucha soledad; al senador Fernández, quien

también ha colaborado y ha sido un promotor de la iniciativa que hoy estamos convirtiendo en realidad; a los asesores de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y de la Banca de la Mujer; a la Universidad Nacional de San Martín, cuyos estudiantes también hicieron su aporte, y a la Municipalidad de Vicente López. Es bueno decirlo, porque es variado el aporte que hemos recibido.

Las articulaciones que se efectuaron no se remontan al siglo pasado. Comenzaron, como también se ha dicho acá, con los crímenes de Ciudad Juárez, en México, en 1999. Hoy, siete países de Latinoamérica han tipificado con distintos alcances este tipo de crímenes. Para algunos, como agravantes; para algunos, como homicidio íntimo; algunos incluyen otras categorías de la sexualidad. Nosotros no nos pusimos de acuerdo, pero realmente creo que, como se dijo antes, esto es una batalla cultural, de eso se trata. Y hoy estamos haciendo un aporte extraordinario. Hoy, le estamos dando un nombre. Hoy, la sociedad está debatiendo que el crimen de las mujeres, con violencia de género, tiene características diferenciadas. De hecho, no todas las muertes de mujeres constituyen femicidios.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, se da con rango constitucional desde 1994 y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, de Belém do Pará, demandaron a los países la necesidad de repensar la legislación y las políticas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Esto no es otra cosa que una medida de acción positiva. Nos estaban pidiendo eso. La Constitución del 94 lo establece en el artículo 75.

Ahora bien, para que nos entienda todo el mundo, ¿qué es una medida de acción positiva? Seguramente, si dejábamos fluir los tiempos, alguna vez, las mujeres y los hombres estaríamos en igualdad de condiciones; se trata de acelerar los tiempos, porque no se puede esperar el curso natural. Hay que acelerarlos, inclusive, con acciones legislativas como la de hoy, porque hoy estamos dando cumplimiento a esa manda constitucional.

Hay un convencimiento general –en la mayoría de los casos es un convencimiento profundo;

en otros, en la minoría por supuesto, se trata de una conveniencia— de que ésta es la oportunidad de tratar este tema. Ya nadie se anima a sostener lo contrario. Pero sí se ha cuestionado la eficiencia o la eficacia de este nuevo tipo penal. ¿Servirá? ¿Servirá para la prevención? ¿Servirá para la erradicación de esta tragedia? No lo podemos asegurar. Es lo mismo que cuestionáramos si la tipificación del hurto o del robo aporta a la prevención o a la erradicación. A lo que aporta, sin dudas, es a la conceptualización social de algo que está realmente muy mal. Eso es lo que estamos haciendo.

El femicidio es un crimen de poder, de sujeción a un poder; y la violencia extrema llega a esto, al femicidio, al crimen. Ya se ha mencionado acá con qué sabiduría, en realidad hace muy poco tiempo, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 habló de femicidio sin que estuviera en el Código; habló de tentativa de femicidio. Y ya leyó el fallo la senadora Higonet. No lo voy a repetir, pero el tribunal dio una definición excelente de lo que hoy estamos tratando. Me siento muy satisfecha porque lo que hoy estamos introduciendo está en absoluta sintonía.

Según los estudiosos y especialistas en el tema, el odio contra la mujer se explica como consecuencia de la infracción a dos normas de la superioridad masculina. Para Rita Segato, la violencia se desata cuando la mujer ejerce autonomía en el uso de su cuerpo, desacatando las reglas de fidelidad, o de celibato, en su caso —la célebre categoría de crímenes contra la honra masculina—, o cuando acceden a posiciones de autoridad, poder económico o poder político tradicionalmente ocupadas por los hombres.

La violencia de género se distingue en este sentido de la violencia ciudadana, puesto que a la afectación de la seguridad e integridad personal, que está presente en ambos casos, se suma la afectación al concepto de igualdad. Los femicidios, insisto, son crímenes de poder. Es necesario considerar la violencia sexista como una cuestión política, social y cultural. La cultura de los roles determina en ese sentido que para los hombres haya determinada actividad y para las mujeres, otra. No sería tan grave si esos roles no estuvieran también jerarquizados y que los roles de los hombres fueran más importantes y más valorados que los de las mujeres. Esta es la gravedad de la

situación. Pero esto tiene una razón de ser y lo han mencionado los que me precedieron en el uso de la palabra. Todos somos hijos de una cultura, de un bagaje cultural que tiene que ver con la educación, con la religión. Recuerdo que lo dijo la senadora Escudero, yo también lo tenía preparado. Nacimos de la costilla de un hombre. ¡Maravilloso! (*Risas.*) Todos somos hijos de esa cultura. El Poder Judicial también es patriarcal, como el marco jurídico que le toca aplicar. Es decir, esto no es una guerra, no está la mitad del mundo queriendo hacernos daño, obviamente que no. Ellos, nosotros, todos los que estamos acá somos hijos de esa cultura. Lo bueno de lo que pasa hoy es que estamos conscientes de que ese bagaje que todos cargamos no sirve más y no tenemos derecho a transferirlo a la generación que viene. Hoy tenemos que desarmar todo eso que hemos adquirido y construir una nueva cultura. Por eso es que sostenemos que los jueces tendrán que hacer un gran esfuerzo y todos nosotros tenemos que hacerlo, para mirar estos hechos de la realidad de otra manera. Por eso es tan importante lo que nos pasa hoy.

Como anécdota, en 1995, hace poco en la historia, la ley 24.453 eliminó el delito de adulterio que estaba incluido en el Código Penal. Estaba entre los delitos contra la honestidad, según los artículos derogados o modificados, 73 y 118. La infidelidad podía ser castigada con un período de un mes a un año de prisión, pero se aplicaba un estatus diferente para determinar la infidelidad. Con la mujer, solamente una situación de infidelidad la hacía encuadrar en el tipo. Ahora, para el hombre necesitaba comprobarse que tenía manceba, que tenía una relación permanente con una mujer a la cual mantenía y demás. Hablo de 1995, con todo esto, más lo que se ha mencionado acá, por ejemplo, el advenimiento. A quién se le podía ocurrir que un violador se podía sentar y arreglar semejante ofensa y seguir como si nada con la víctima. Entonces, ¿cómo podemos negar que se trata de una batalla cultural?

Soy por naturaleza una persona optimista y creo que esto es muy bueno; que nos faltan cosas, que hacen falta políticas activas que realmente estén dedicadas a la prevención, que se sostengan en el tiempo, que se acompañe a la víctima, sin duda. Pero sin duda, también, después de hoy, vendrá una catarata de proyectos

y de situaciones que contemplen todo esto que los senadores han propuesto.

Sr. Presidente. – La senadora Negre de Alonso le pide una interrupción. ¿Se la concede?

Sra. Riofrio. – Sí, cómo no.

Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. – Disculpe, senadora, que usted está cerrando y le agradezco la interrupción. A lo mejor, interpreté mal lo que estaba diciendo, pero yo creo que nosotros estamos legislando para la patología.

Cuando usted dice que somos criados así, que es nuestra cultura, la verdad es que me quiero referir a mí. Yo no me crié en ningún hogar machista ni golpeador; y eso que tenía un padre bastante mayor. Me crié en un hogar en el que me hacían conocer mis derechos, se me daban mis derechos, se me respetaba como persona, como niña. Y yo quiero transmitir ese amor que yo recibí en una familia, a mis hijas. Yo no tengo nada de qué desprenderme de mi educación. Entonces, no me quiero sentir comprendida en esto que la senadora ha dicho. Sí creo que esto es un flagelo y es terrible; y estamos legislando para la patología.

Además, ratifico lo que dije al principio, en el sentido de que además de legislar para la patología debemos trabajar para la prevención, porque lo que queremos no es condenas cuando la mujer está muerta sino prepararla para que sepa defenderse y acudir.

Así que, en ese sentido, si yo me callaba esto, era como que compartía que me sentía parte de una cultura de la que no me siento parte. Reitero que gracias a Dios vengo de un hogar donde se me ha respetado como mujer, como hija, y donde no he tenido ni cultura machista ni padre machista, a pesar de provenir de una provincia muy tradicional y muy pequeña.

Sra. Escudero. – ¿Me concede una interrupción, señora senadora?

Sr. Presidente. – Senadora Riofrio: le pide también una interrupción la senadora Escudero.

Sra. Riofrio. – Perdón, senadora, pero estoy cerrando... Bueno...

Sr. Presidente. – Para una interrupción tiene la palabra la señora senadora Escudero.

Sra. Escudero. – Señor presidente: con respecto a lo que señaló la senadora Negre de Alonso, quiero decir que estamos hablando de la cultura de la subordinación de la mujer, y todos nos hemos criado en esta cultura. Por alguna razón, recién votamos desde hace pocos años. Por alguna razón, fue necesaria la ley del cupo femenino para que hoy estemos aquí deliberando. O sea, hay un cambio cultural que venimos arrastrando desde hace muchos años, que es esta concepción de subordinación de la mujer. No significa que vengamos de hogares golpeadores; no es ese el sentido.

Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la palabra la señora senadora Riofrio.

Sra. Riofrio. – Señor presidente: sí coincido con la senadora Negre de Alonso en algo: yo tampoco vengo de un hogar machista. Al contrario, vengo de un hogar donde se respetó siempre la opinión de cada uno de los miembros, pero cuando sirvo la mesa, yo todavía le sirvo primero al varón.

Sr. Basualdo. – ¡Mal hecho!

Sra. Riofrio. – ¡Mal hecho! (*Risas.*) Porque somos parte de una cultura.

Y obviamente que el Código Penal legisla para la patología. Pero todos tenemos un formato; y cuando ese formato lo tiene alguien que rebasa los límites de la formalidad, caemos en todas estas cuestiones. Ahora bien, cuando ese formato siente empatía, caemos en la emoción violenta. La mayoría dice: “Y bueno, si a mí me hubiera pasado, yo habría hecho lo mismo”. Esa es la situación por la cual los jueces aplicaban el estado de emoción violenta. En la mayoría de los casos tenía que ver con una cuestión de posesión. En la mayoría de los casos eran crímenes por temas de infidelidad: “Si no es mía; no es de nadie”. Ese era un concepto, pero lo vivimos...

Cuando hablamos de bagaje y patrones culturales, creo que no nos estamos refiriendo ni haciendo cargo de que todos venimos con esta cuestión de ser asesinos potenciales en cualquier momento. Debemos tener la idea de que, obviamente, estamos legislando para la patología.

¿Cuáles eran los parámetros culturales analizados por los jueces para justificar estas situaciones? La infidelidad, la negativa a realizar las tareas del hogar, las tareas mal realizadas, que la

comida estaba fría, o tener sueño, o expectativas de desarrollo personal.

La doctora Claudia Hasanbegovic dijo sobre este tema algo muy interesante, que yo he rescatado. Ella dijo que las sentencias no son sólo para los sentenciados sino que también son mensajes para toda la sociedad. Hace mucho que vemos que el sistema penal es clasista, discriminatorio y patriarcal, pero que este sistema no es un dogma de fe, ni una fortaleza inexpugnable.

Esto es lo que estamos hoy comenzando a hacer. No más términos neutrales para definir la muerte de mujeres como consecuencia de la violencia de género. No más la mirada en la conducta de la víctima como provocadora de la violencia. No más atenuación. No más emoción violenta como justificación.

Para terminar, quiero citar algo muy lindo, muy bueno y muy profundo de Eduardo Galeano, escritor uruguayo que dijo lo siguiente: “Hay criminales que proclaman tan campantes ‘La maté porque era mía’. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia y derecho de propiedad privada, que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ninguno, ni el más macho de los supermachos, tiene la valentía de confesar ‘La maté por miedo’. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre, es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo”. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente. – Si ningún otro señor senador va a hacer uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola votación el proyecto en consideración, con la modificación propuesta.

En este caso, como hay una modificación, de votarse positivamente el proyecto volverá a la Cámara de Diputados. Se requiere la mayoría prevista por el artículo 81 de la Constitución Nacional, es decir, dos tercios de los presentes.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 47 votos por la afirmativa, ninguno por la negativa. Unanimidad. O sea, se ha superado la mayoría prevista en el artículo 81 de la Constitución Nacional.

–El resultado de la votación surge del acta correspondiente.¹

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Vuelve a la Cámara de Diputados.²

Queda un pedido sobre tablas.

Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. – Señor presidente: solicito que se someta a la consideración del cuerpo el tratamiento sobre tablas de un proyecto de declaración, contenido en el expediente S.-3.133, por el cual este Senado vería con agrado que la Asociación del Fútbol Argentino denomine al recientemente iniciado Campeonato de Primera B Nacional “Wanda Taddei”, contra la violencia en todas sus manifestaciones.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: propongo que analicemos este tema con un concepto un poco más amplio. Han ocurrido también otros hechos sobre esta misma problemática. Así, por ejemplo, en La Pampa se produjo un hecho realmente dramático, producto de un avenimiento judicial. Entonces, creo que podríamos acordar una denominación en forma colectiva, para hacer referencia a todas las víctimas. Busquemos una alternativa para contener a todos. No me parece mala la idea; no quiero que se me malinterprete. Pero pido que lo pensemos un poco más, para elaborar algo que sea más contenedor.

Sr. Presidente. – Como no hay más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.

–Son las 23 y 41.

JORGE A. BRAVO.
Director General de Taquígrafos.

¹ Ver el Apéndice.

² Ver el Apéndice.

Votación Nominal

130º Período Legislativo - Ordinario- 11º Sesión

DICTAMEN EN DIVERSOS PROYECTOS DE LEY EN REVISIÓN Y EN VARIOS PROYECTOS DE LEY MODIFICANDO EL CÓDIGO PENAL, INCORPORANDO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO COMO AGRAVANTE EN EL DELITO DE HOMICIDIO.

ORDEN DEL DÍA 983

(CD-16/12, S-205/11, S- 267/11, S- 384/11, S- 383/11, S- 611/11, S-788/11, S-967/11, S- 1058/11, S-18/12, S-110/12, S-162/12, S-535/12, S-563/12, S- 1460/12, S- 1872/12

VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Observaciones: Artículo 81 Constitución Nacional

Acta N°: 9	Fecha: 3-10-12	Hora: 23:41
Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo	Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes	Miembros del Cuerpo: 72
Presidente: BOUDOU, Amado	Desempate: NO	

Presentes Identificados:	47	Votos afirmativos:	47
Presentes No Identificados:	-	Votos Negativos:	-
Total Presentes:	47	Abstenciones:	-
Ausentes:	25		
Votos Afirmativos Necesarios:	24	RESULTADO de la VOTACIÓN	AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones

	Versión Original	Actual
GODOY, Ruperto Eduardo	LEV.VOT.	AUSENTE
PARRILLI, Nanci María A.	LEV.VOT.	AUSENTE

Observaciones:

El senador Godoy y la Senadora Parrilli, se levantaron durante la votación , anulando el sistema el voto emitido.

Votación Nominal

130º Período Legislativo - Ordinario- 11º Sesión

DICTAMEN EN DIVERSOS PROYECTOS DE LEY EN REVISIÓN Y EN VARIOS PROYECTOS DE LEY MODIFICANDO EL CÓDIGO PENAL, INCORPORANDO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO COMO AGRAVANTE EN EL DELITO DE HOMICIDIO.

ORDEN DEL DÍA 983

{CD-16/12, S-205/11, S- 267/11, S- 384/11, S- 383/11, S- 611/11, S-788/11, S-967/11, S- 1058/11, S-18/12, S-110/12, S-162/12, S-535/12, S-563/12, S- 1460/12, S- 1872/12}

VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Observaciones: Artículo 81 Constitución Nacional

Acta N°: 9

Fecha: 3-10-12

Hora: 23:41

Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo

Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente: BOUDOU, Amado

Desempate: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
AGUIRRE, Hilda Celia	AFIRMATIVO	LABADO, María Ester	AFIRMATIVO
ARTAZA, Eugenio Justiniano	AUSENTE	LATORRE, Roxana Itatí	AFIRMATIVO
BARRIONUEVO, Walter Basilio	AFIRMATIVO	LEGUIZAMÓN, María Laura	AFIRMATIVO
BASUALDO, Roberto Gustavo	AFIRMATIVO	LINARES, Jaime	AUSENTE
BERMEJO, Rolando Adolfo	AFIRMATIVO	LOPEZ, Osvaldo Ramón	AFIRMATIVO
BIANCALANI, Fabio Darío	AFIRMATIVO	LORES, Horacio	AUSENTE
BLAS, Inés Imelda	AFIRMATIVO	LUNA, Mirtha María Teresita	AFIRMATIVO
BONGIORNO, María José	AFIRMATIVO	MANSILLA, Sergio Francisco	AFIRMATIVO
BORELLO, Marta Teresita	AFIRMATIVO	MARINO, Juan Carlos	AUSENTE
CABANCHIK, Samuel Manuel	AUSENTE	MARTINEZ, Alfredo Anselmo	AFIRMATIVO
CABRAL, Salvador	AUSENTE	MAYANS, José Miguel Ángel	AFIRMATIVO
CANO, José Manuel	AFIRMATIVO	MEABE de MATHO, Josefina Angélica	AUSENTE
CASTILLO, Oscar Aníbal	AUSENTE	MENEM, Carlos Saúl	AUSENTE
CIMADEVILLA, Mario Jorge	AUSENTE	MONLLAU, Blanca María del Valle	AUSENTE
COLAZO, Mario Jorge	AFIRMATIVO	MONTERO, Laura Gisela	AFIRMATIVO
CORRADI de BELTRÁN, Ana María	AFIRMATIVO	MORALES, Gerardo Rubén	AFIRMATIVO
CORREGIDO, Elena Mercedes	AFIRMATIVO	MORANDINI, Norma Elena	AUSENTE
DE LA ROSA, María Graciela	AFIRMATIVO	NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita	AFIRMATIVO
DI PERNA, Graciela Agustina	AFIRMATIVO	NIKISCH, Roy Abelardo	AFIRMATIVO
DÍAZ, María Rosa	AFIRMATIVO	PARRILLI, Nanci María Agustina	LEV.VOT
ESCUDERO, Sonia Margarita	AFIRMATIVO	PEREZ ALSINA, Juan Agustín	AUSENTE
ESTENSSORO, María Eugenia	AUSENTE	PERSICO, Daniel Raúl	AFIRMATIVO
FELLNER, Liliana Beatriz	AUSENTE	PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Aníbal Domingo	AFIRMATIVO	PICHETTO, Miguel Ángel	AFIRMATIVO
FILMUS, Daniel Fernando	AFIRMATIVO	RACHED, Emilio Alberto	AUSENTE
FUENTES, Marcelo Jorge	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GIMENEZ, Sandra Daniela	AFIRMATIVO	RIOFRIO, Marina Raquel	AFIRMATIVO
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	AFIRMATIVO	RODRIGUEZ SAA, Adolfo	AUSENTE
GODOY, Ruperto Eduardo	LEV.VOT	ROJKES de ALPEROVICH, Beatriz L.	AFIRMATIVO
GONZALEZ, Pablo Gerardo	AFIRMATIVO	ROLDAN, José María	AFIRMATIVO
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel	AFIRMATIVO	ROMERO, Juan Carlos	AUSENTE
GUINLE, Marcelo Alejandro	AFIRMATIVO	RUIZ DÍAZ, Elsa Beatriz	AFIRMATIVO
HIGONET, María de los Angeles	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	AUSENTE
IRRAZABAL, Juan Manuel	AFIRMATIVO	VERA, Arturo	AUSENTE
ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa	AFIRMATIVO	VERANI, Pablo	AUSENTE
JUZZI, Alfredo	AUSENTE	VERNA, Carlos Alberto	AUSENTE

V

INSERCIONES

Las inserciones remitidas por los señores senadores a la Dirección General de Taquígrafos, para su publicación, son las siguientes:

1

**SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
DI PERNA**

**Reparación de los años derivados de los accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales
(O.D. 1.041/12 y anexo)**

Señor presidente:

Desde la Comisión de Trabajo se ha firmado un dictamen sin escuchar a los representantes de las centrales obreras. Se firmó incluso antes de que el ministro Tomada pudiera finalizar su exposición. Fue un tratamiento que no merece otra calificación menor a nefasto. Se le ha dado el tratamiento expreso a un proyecto que va en desmedro de los trabajadores y que de ninguna manera va a solucionar el problema de fondo. Es por ello que voy a votar en contra de este proyecto y para ello me voy a detener en tres puntos que considero vitales y que, creo, van en perjuicio de los trabajadores. Son: 1. la prohibición de la doble vía, 2. los mecanismos de actualización y 3. el listado de enfermedades.

En primer lugar, este proyecto prohíbe la posibilidad de la doble vía y viola así el principio de la Corte Suprema donde se tiene que facilitar la indemnización tarifada al trabajador y, si éste entiende que la suma no repara el daño, tiene la posibilidad de hacer su reclamo en el fuero de trabajo donde deberá demostrar y fundamentar la reparación que pretende.

Esta modificación que se pretende introducir no cambia nada porque evidentemente se abre la puerta a una nueva oleada de inconstitucionalidades porque la doctrina de la Corte no se va a cambiar por la voluntad de los legisladores y funcionarios.

En segundo lugar están los mecanismos de actualización que se pretende introducir como algo novedoso y que también van a resultar en un detrimento del trabajador porque no resulta del todo claro cuál va a ser el procedimiento que se va a realizar para establecerlo. En principio parece estará realizado en base a un mecanismo de estadísticas y censos que el Estado llevará adelante. Y la verdad es que, con el manejo de las estadísticas que lleva el gobierno en ese aspecto, resulta algo verdaderamente temerario.

Como tercero y último punto creo se mantiene la idea errónea del listado de enfermedades cerrado. Y ello es caer de nuevo en el mismo absurdo porque las enfermedades no las define la inteligencia de cada uno sino la acción que cada trabajador lleva adelante en cada una de las empresas. Este tema necesita un tratamiento más profundo, con más tiempo, y que al parecer se ha tomado a la ligera. Se le impide al juez que vaya más

allá de las figuras que están establecidas por el decreto que marcan las enfermedades. Impidiéndole desarrollar ese concepto de reparación integral. Es más grave aún cuando hay antecedentes que amplían el nomenclador de las enfermedades laborales de la OIT que ya han sido aplicados por la Corte y el resto de los fueros inferiores.

En este sentido lo más oportuno hubiera sido contemplar la posibilidad de constituir comités mixtos de empresas para promover la prevención de accidentes y lograr mayor conciencia de los trabajadores respecto de las normas de seguridad e higiene. Es un tema serio y hay que tener en cuenta lo que dijo Pablo Micheli, estamos hablando de cuatro accidentes fatales por día.

Para finalizar y a modo de conclusión, creo que este proyecto no avanza en absoluto en la protección de la filosofía de la protección de trabajador. Se retrocede porque no se tuvo en cuenta un montón de inconstitucionalidades que van a seguir siendo dictadas por la misma Corte Suprema.

Le da al trabajador un tratamiento inhumano porque lo obliga a elegir entre ser indemnizado por la ART o esperar a recibir lo que merece por vía judicial con todo lo que puede tardar la Justicia. Se juega así con la desesperación y se olvida que detrás de todo trabajador hay un ser humano, una familia y un montón de necesidades para sobrevivir. No se tiene en cuenta lo humano y sólo se toman en cuenta las estadísticas.

El gobierno debería ser un poco más abierto y auto-crítico. No podemos aprobar una ley hecha sin consenso y a los empujones. Se debería haber trabajado este proyecto con los gremios y dejar de lado esa visión de amigo-enemigo. No es congruente acusar de desestabilizador o de hacerle el juego a la derecha a aquellos que reclaman que el salario no es ganancia o que el salario familiar sea para los hijos de los argentinos porque haciendo eso sólo se aleja más de los trabajadores. Y eso es algo que desde mi bloque jamás pienso hacer.

Por ello, señor presidente voy a votar en contra del proyecto que estamos tratando en el día de hoy.

2

**SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
BLAS**

**Modificación del Código Penal. Incorporación
de la figura del delito de femicidio
(O.D. N° 983/12)**

Señor presidente:

Considerar la figura del femicidio como delito autónomo e incorporarla al Código Penal nos indica

que hemos tomado conciencia como sociedad sobre la gravedad de la violencia de género, que finalmente se visibiliza en la enorme cantidad de vidas que se ha cobrado esta problemática.

Damos hoy un paso importante, ya que la justicia penal ofrece una respuesta al problema, pero no es suficiente, persisten aún estereotipos y prejuicios de género, existe aún una percepción social de que los hechos de violencia contra las mujeres son tolerados y crean un ambiente que facilita la violencia doméstica.

Generamos un gran avance pero aún no es suficiente, se deben generar condiciones necesarias con acciones que apunten a la sensibilización, difusión y contención de aquellas mujeres y familias que se presentan vulnerables o son víctimas de violencia de género.

Resulta esta medida una decisión de suma importancia y se constituye en el puntapié inicial para propiciar un cambio cultural, que mitigue los efectos de prácticas arraigadas históricamente y que posicionan a la mujer en desventaja y debilidad frente a la violencia.

Por todo ello, acompaño con mi voto positivo el presente proyecto.

3

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
PÉRSICO

**Modificación del Código Penal. Incorporación
de la figura del delito de femicidio
(O.D. N° 983/12)**

Señor presidente:

Como bien se puso de manifiesto, la norma que se trata tiene como objeto establecer, no sólo un agravamiento en la pena en caso de homicidio cuando se trate de cónyuges, excónyuges, conviviente, exconviviente y el promovido por el odio a la orientación sexual, la identidad de género o su expresión, sino también incorporar la tipificación del delito de femicidio como artículo 80 bis del Código Penal, siendo la vida de la mujer, el bien jurídico a proteger.

Este Congreso ha asumido con mucha responsabilidad la protección de la vida de la mujer, debido a que la violencia de género se ha difundido lo suficiente como para tomar nota de que como sociedad estamos frente a un problema sistémico y estructural, del cual, como representantes del pueblo, no hemos hecho oídos sordos, sino accionar los resortes institucionales para producir un cambio normativo.

Asimismo, tenemos que ser conscientes de que este mal no lo resolveremos sólo con la sanción de esta norma. Las modificaciones al Código Penal no garantizan la solución de esta cuestión. Esta problemática requiere de una política de Estado que sea, a la vez, acompañada por el Poder Judicial, receptado en sus fallos.

De esta manera vamos a estar modificando una tendencia cultural, que se inicia con el cambio en las

normas, para luego ser reflejadas en los fallos judiciales, que impactan finalmente en la sociedad.

Señor presidente, los avances que hemos producido en estos años en la legislación civil, reconociendo nuevos derechos civiles, y las implicancias que éstos tienen en la formación de una familia, motiva a que incluyamos en el proyecto de ley que estamos tratando a los convivientes y exconvivientes, equiparando la no formalización del vínculo dentro del agravamiento.

Este marco de reconocimientos se encuadra en el lineamiento constitucional del artículo 37 al cual debemos interpretarlo comprensivamente y que plantea la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres, la cual debe ser acompañada por medidas de acción positiva. Es decir que para igualar las condiciones del hombre y la mujer debemos intervenir a los fines de asegurarla y protegerla por medio de leyes que la garanticen. Y esto es lo que hoy estamos haciendo.

Entendiendo que el cambio refleja lo intolerable que resulta esta conducta para nuestra sociedad y para este Congreso, nos manifestamos firmemente para desarraigar este prejuicio de género estableciendo penas ejemplares.

Por otro lado, quiero sumar estas palabras al resto de mis pares para que conste una posición unánime de esta Cámara en contra del abaratamiento de las penas en cuanto al delito que hoy se trata, cuando se trate de un homicida con historial de violencia contra la mujer, planteos de celopatía, de violencia excesiva por parte del hombre que sólo intentaba lesionar a la mujer y que termina en homicidio preterintencional, emoción violenta, etcétera y, todo esto para que obre como espíritu de la norma que estamos tratando. Así como dijo un senador preopinante: "...Al violento no le vamos a dar el beneficio de la emoción violenta o de las circunstancias extraordinarias de atenuación...".

Finalmente, señor presidente, deseo destacar la labor de la Banca de la Mujer, que ha tomado una participación activa en la lucha contra la violencia de género y en pos de una igualdad real de derechos.

Por lo expuesto, señor presidente, es que mi voto es favorable al presente proyecto y espero sea aprobado por unanimidad.

4

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
RIOFRIO

**Reparación de los daños derivados de los accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales
(O.D. N° 1.041/12 y anexo)**

Señor presidente:

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo –modificatorio de la ley 24.557, de riesgos del trabajo– se propone atender la reparación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, configurando

un régimen de reparación que integre las normas de la especialidad.

La iniciativa tuvo en cuenta los reproches constitucionales que le realizara a diversos artículos de la ley 24.557 la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (verbigracia: “Castillo” [1] *Fallos*, 327:3610; “Aquino” [2], *Fallos*, 327:3753 y “Milone”, *Fallos*, 327:4607, entre otros).

El proyecto establece que el derecho a la reparación dineraria se computará, independientemente del momento en que se determine su procedencia, desde el acaecimiento del daño o desde la determinación de la relación de causalidad adecuada de la enfermedad profesional (artículo 2°).

Por otra parte, cuando el daño se produzca en el lugar de trabajo o lo sufra el dependiente mientras se encuentre a disposición del empleador, el damnificado percibirá junto a las indemnizaciones dinerarias previstas en el régimen, una indemnización adicional de pago único en compensación por cualquier otro daño no reparado por las fórmulas del sistema, de modo tal que el régimen ofrezca una reparación plena del daño. Dicha indemnización adicional será equivalente al 20 % y en caso de muerte o incapacidad total, nunca será inferior al \$ 70.000 (artículo 3°).

Asimismo, se establece una opción a favor del damnificado o sus derechohabientes entre las indemnizaciones previstas en este régimen o las que les pudieran corresponder por igual concepto con fundamento en otros sistemas de responsabilidad, los que no serán acumulables, quedando sin efecto la restricción impuesta en el artículo 39 de la ley 24.557 (artículo 4°) constituyendo, en consecuencia, uno de los aspectos centrales de esta reforma.

En el nuevo sistema, los obligados por la ley 24.557 y sus modificatorias al pago de la reparación dineraria deberán, dentro de los 15 días de notificados de la muerte del trabajador, o de la homologación o determinación de la incapacidad laboral de la víctima de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, notificar fehacientemente a los damnificados o a sus derechohabientes los importes que les corresponde percibir por aplicación de este régimen, precisando cada concepto en forma separada e indicando que se encuentran a su disposición para el cobro (artículo 4°).

A partir de esta notificación: *a)* se podrán ejercer las acciones judiciales con fundamento en otros sistemas de responsabilidad y *b)* comenzará a computarse el plazo de prescripción.

Otra cuestión novedosa en el proyecto es la habilitación al empleador para contratar un seguro aplicable a otros sistemas de responsabilidad que puedan ser invocados por los trabajadores damnificados (artículo 7°).

También se prescribe un ajuste general de los importes por incapacidad laboral, de acuerdo a la variación del RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables) publicado por la Secretaría

de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (artículo 8°).

Por considerar que esta iniciativa coloca en mejor situación a los trabajadores que lamentablemente sufren un infortunio laboral, adelanto mi voto favorable al dictamen en tratamiento y solicito el acompañamiento de mis colegas.

5

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
FELLNER

Modificación del Código Penal. Incorporación de la figura del delito de femicidio (O.D. N° 983/12)

Señor presidente:

El proyecto de ley que estamos tratando reviste gran importancia ya que toma nota de una realidad dolorosa, lamentable y creciente vinculada a la forma extrema de violencia ejercida por un hombre en perjuicio de una mujer o persona que se autopercibe con identidad de género femenina: el femicidio.

Me parece oportuno señalar, en primer lugar, que la problemática de la violencia de género no estuvo ni está al margen del proceso constante de ampliación de derechos experimentado desde el año 2003 al presente. En efecto es posible mencionar a modo ejemplificativo numerosos avances que se han dado en los tres poderes del Estado, con la firme voluntad de luchar contra este flagelo.

Así, podemos señalar la sanción de la ley 26.485 –Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales–; la creación del Observatorio Nacional de Violencia contra las Mujeres –año 2010–; la creación de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual –año 2011–; la creación de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género (Consavig) –año 2011–; entre otras.

También es dable destacar la creación de la Oficina de Violencia Doméstica en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Es decir, se observa cómo los tres poderes del Estado, desde sus respectivas incumbencias han encarado el abordaje de esta problemática, en un contexto determinado por la búsqueda continua de la protección de los derechos de las personas, fundamentalmente aquellos que fueron postergados o ignorados por mucho tiempo.

La violencia ejercida por hombres sobre las mujeres, en sus distintas modalidades tales como lesiones, abusos sexuales y homicidios se encontraba hasta no hace mucho tiempo oculta en las sociedades modernas. Es recién en la segunda mitad del siglo XX que las mujeres a partir de sus experiencias comienzan a visibilizar socialmente estas cuestiones considerándolas como

reflejo de la asimetría existente en las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Esta asimetría resultaba a la vez funcional para perpetuar la subordinación y desvalorización de lo femenino frente a lo masculino.

En este sentido me parece oportuno reiterar lo dicho por nuestra presidenta de la Nación en oportunidad de anunciar la reglamentación de la ley 26.485: “Creo que es una gran batalla cultural, por sobre todas las cosas [...] es una batalla que debe comprometernos fuertemente a todos y a todas para tener una mejor calidad institucional. Allí se mide la verdadera calidad institucional y la verdadera calidad de una sociedad, cuando se hacen de cuenta de garantías, esta protección y una sociedad se organiza institucionalmente [el Estado] y también en las organizaciones no gubernamentales para precisamente llevar esta tarea adelante”.

Y en esta batalla cultural contra la violencia de género, resulta necesario contar con una herramienta legal que sancione con todo el rigor la forma más extrema de violencia contra la mujer, como es el femicidio.

El término “femicidio” para referir la muerte de mujeres por el hecho de ser tales fue utilizado por primera vez en el año 1976. La circunstancia de nombrar estos crímenes con una denominación particular y específica representa en sí misma un avance ya que es el puntapié inicial para visibilizar el problema y luego abordarlo analíticamente para comprender sus causas, dimensiones y efectos.

En este sentido, es dable afirmar que “femicidio” es un neologismo que tiene una génesis más bien política y consiste en el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer motivado por desprecio, odio, placer o sentido de propiedad sobre ella.

En realidad el femicidio es sólo una parte de la violación sistemática de los derechos humanos de niñas, mujeres y personas que se autoperiben con identidad de género femenino en razón de su condición de tales. Opera, a su vez, como forma de control y dominación hacia todas las mujeres en tanto género. Es así la expresión extrema de la violencia de género, naturalizada en la cultura y tolerada, hasta no hace mucho tiempo por el Estado y la sociedad.

La comprensión política del femicidio redimensiona la violencia de género contra las mujeres como un asunto público que comprende a la sociedad entera. Asimismo, alude a la obligación que surge en cabeza de los Estados de detener la situación sistemática y reiterada de violencia a la que son sometidas las mujeres y personas con identidad de género femenino.

La investigación de los asesinatos cometidos contra ellas ha permitido establecer distintas clases de femicidio. Ellas son:

a) *Femicidio íntimo*: es aquel del cual se registran mayor cantidad de casos y se da en el ámbito de lo privado, en el espacio de las relaciones íntimas. Son aquellos asesinatos cometidos por hombres con quien

la víctima tenía o tuvo una relación de convivencia, familiar, íntima u otras afines.

Habitualmente estos crímenes se presentan como la culminación de actos de violencia ejercidos durante años. Los motivos pueden ser celos, odio, una discusión, pero siempre están el sentido de propiedad y los afanes de los hombres por dominar a las mujeres y controlarlas.

Los victimarios suelen ser el amante, novio, esposo, padre, conviviente, entre otros. Son hombres violentos que ven a las mujeres como de su propiedad y creen que tienen derecho a matarlas.

b) *Femicidio sexual*: se denomina así en atención al ámbito relacional en el que ocurre o la causa que lo determina. Se refiere a los homicidios cometidos por hombres con quienes las víctimas nunca tuvieron relaciones íntimas, familiares o de convivencia. Estos casos de femicidio involucran frecuentemente el ataque sexual a la víctima.

c) *Femicidios vinculados*: se trata de acciones del femicida que le sirven para consumir su fin y consisten en matar, castigar o destruir psicológicamente a la mujer sobre la cual se ejerce la dominación. Las dos variantes que pueden presentarse son:

1. Personas que fueron asesinadas por el femicida, al intentar impedir el femicidio o que quedaron atrapadas “en la línea de fuego”.

2. O bien personas con vínculo familiar o afectivo con la mujer, que fueron asesinadas por el femicida con el objeto de castigar y destruir psíquicamente a la mujer.

En este contexto resulta oportuno poner de manifiesto datos estadísticos que contribuyen a describir el problema. El Observatorio de Femicidios en la Argentina de la Sociedad Civil “Adriana Marisel Zambrano” ha realizado un trabajo de investigación correspondiente al período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2010.

Conforme a aquélla, en el año 2010 se registraron 260 femicidios simples y femicidios vinculados de mujeres y niñas, y 15 femicidios vinculados de hombres y niños.

La Oficina de Violencia Doméstica revela datos de este año que marcan a las claras las particularidades del problema. De sus intervenciones en la materia se desprende que aproximadamente el 70 % de las víctimas de la violencia son mujeres y el 85 % de los victimarios son hombres. En cuanto a la relación que vincula a ambos, en el 40 % de los casos se trata de ex parejas y en el 24 % de concubinos.

Las cifras son por demás elocuentes para dimensionar la problemática, a lo que se adiciona que ellas aumentan sostenida y pronunciadamente, año tras año.

A su vez, estas cifras no representan el total de casos ya que hay situaciones que impiden la tipificación de los decesos como femicidio. Tal el caso de las mujeres

que ingresan de urgencia a la guardia de un hospital con evidencia de violencia del tipo descrito, pero al fallecer en sus certificados de defunción figura muerte por paro cardiorrespiratorio u otra causal, invisibilizando la violencia que generó el cuadro traumático.

Otro ejemplo es el caso de mujeres que aparecen en las noticias como muertas por suicidio, pero que han padecido previamente una situación de violencia sexista en sus vidas.

Para concluir me gustaría citar a Amnistía Internacional, que ha afirmado que “la violencia contra las mujeres es la mayor atrocidad cometida contra los derechos humanos en nuestro tiempo. Desde que nacen hasta que mueren, tanto en tiempos de paz como de guerra, las mujeres se enfrentan a la discriminación y la violencia del Estado, la comunidad y la familia”.

Señor presidente, convencida de la necesidad imperiosa de contar con esta herramienta legislativa, es que voto afirmativamente el proyecto bajo tratamiento.

6

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
CORRADI DE BELTRÁN

**Modificación del Código Penal. Incorporación
de la figura del delito de femicidio
(O.D. N° 983/12)**

Señor presidente:

El femicidio es una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres, es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad.

De acuerdo a la definición establecida por la ONU el femicidio es: “El asesinato de mujeres como resultado extremo de la violencia de género que ocurre tanto en el ámbito privado como en el espacio público”.

Del 50 al 70% de los asesinatos de mujeres en el mundo son perpetrados por sus maridos, novios o convivientes o por sus exmaridos, exnovios o convivientes. A diferencia de los crímenes de hombres efectuados por sus mujeres, que no superan el 5 %.

Porque no existe una justicia ejemplarizante que meta a la cárcel al hombre después de la primera que-rella. Por no existir un seguimiento a las denuncias, esto deja al hombre libre para cometer el crimen.

Es necesario avanzar con esta ley como parte de la erradicación de la violencia de género, pero hay que continuar en la implementación de políticas sociales que apunten a la eliminación de todo tipo de violencia contra las mujeres.

Es necesario considerar a la violencia sexista como una cuestión política, social, cultural y de derechos humanos, de esta forma se podrá ver la grave situación que viven las mujeres, niñas y niños en la Argentina como una realidad colectiva sobre la que se debe actuar de manera inmediata.

En mi provincia, Santiago del Estero, sólo entre enero y agosto de este año (2012) hubo 2.340 ataques a mujeres.

El escalofriante dato surge de la cantidad de denuncias que se realizaron en la provincia, en lo que va del 2012. Por si fuera poco, en 780 casos, los victimarios fueron reincidentes en al menos tres oportunidades.

La violencia de género es el delito que más se atiende en las comisarías.

Los principales resultados indican que los agresores suelen presentar con frecuencia alteraciones psicológicas (falta de control sobre la ira, dificultades en la expresión de emociones, distorsiones cognitivas, déficit de habilidades de comunicación y de solución de problemas y baja autoestima).

Son personas celosas, viven obsesionadas por ejercer el dominio entre quienes las rodean, doble personalidad, repiten el ciclo de violencia, no tienen sentimiento de culpa luego de golpear a una mujer, menosprecian a la víctima en privado o en público.

Asociaciones como la Casa de las Mujeres Santiagueñas son impulsoras de movilizaciones y luchas en contra de la violencia de género en mi provincia y creemos que las herramientas legislativas son imprescindibles para ganar esta batalla.

Las denuncias recibidas en la Oficina de Protección a las Víctimas de Violencia Familiar y de la Mujer, que depende del Poder Judicial de Santiago del Estero, tuvieron un fuerte incremento del 45 % este año respecto de 2011, de acuerdo con las cifras del séptimo informe estadístico, que reúne datos hasta junio último.

Este drama, además, provoca otro problema de complejas implicancias y difícil solución: los niños huérfanos. De acuerdo con los datos de la Dirección de Género de la provincia, la violencia doméstica dejó, en lo que va del año, un total de 26 niños sin su mamá, mientras que, si se suman los hechos de 2011, la cifra sube a 49 –en ellos no se suman los casos de femicidio vinculado–. A ello se agrega que, en la mayoría de los casos, su papá quedó preso.

Señor presidente, voy a acompañar la sanción de esta ley porque sin lugar a dudas contribuiría al reclamo de nuestra sociedad, que al unísono expresa: “Basta de matar a las mujeres”.

7

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
RACHED

**Reparación de los daños derivados
de los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales (O.D. N° 1.041/12 y anexo)**

Señor presidente:

El proyecto sobre modificación a la Ley de Riesgos del Trabajo que estamos tratando tiene el apoyo del bloque del Frente para la Victoria, que defiende el proyecto oficial, y de la Unión Industrial Argentina (UIA), pero no tiene el apoyo de los trabajadores.

Ello se deduce de la reunión de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social que preside la senadora Ana Corradi de Beltrán, a la que fueron invitados solamente los defensores del proyecto, pero no así quienes con argumentos propios y consistentes se oponían al mismo. En dicha reunión participaron algunos miembros del Poder Ejecutivo, como el ministro de Trabajo Tornada, el señor De Mendiguren, como representante de la UIA, y algunos gremialistas cercanos al gobierno como el señor Caló. Ahora bien, no se invitó, por ejemplo, a la Confederación General del Trabajo (CGT), ni a participar ni mucho menos a exponer su punto de vista.

El titular de la Confederación General del Trabajo (CGT), en la audiencia que se desarrolló a propuesta de nuestros bloques, ha manifestado su rechazo al proyecto con argumentos que son por demás atendibles y que nosotros compartimos.

Fundamentalmente el cambio que se le cuestiona al proyecto por parte de la dirigencia sindical es que se quita al fuero laboral la competencia para entender en los juicios que se promuevan por los accidentes o enfermedades de los trabajadores para entregársela al fuero civil y comercial. Como se sabe la justicia civil es menos propensa para fallar a favor de los trabajadores y los montos indemnizatorios son sensiblemente menores a los que establece la justicia del trabajo, más sensible a los derechos de los trabajadores.

Indudablemente, el proyecto en tratamiento va en contra de los trabajadores, porque, como se dijo, se quita la competencia de los tribunales laborales para dársela a la justicia civil, que, por su concepción, otorga normalmente menor monto indemnizatorio a quienes hayan sufrido un accidente de trabajo o enfermedad profesional.

Por eso estamos en contra de este proyecto, que además ha tenido un cuestionable tratamiento por parte de la comisión correspondiente, ya que el mismo ingresó a este Congreso el día jueves 20 de septiembre de 2012 y el día martes 25 (luego del feriado del 24) se emitió dictamen escuchando solamente a las personas que defendían el proyecto y no así a aquellos que pudieran haber tenido una visión diferente al respecto.

Nuevamente el oficialismo ha hecho pesar la fuerza del número por sobre la fuerza de los argumentos pero queremos denunciar esta situación y dejar en claro que este proyecto va en contra de los intereses de los trabajadores y no a favor, como se quiere hacer creer. Nada más.

8

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
LUNA

**Modificación del Código Penal. Incorporación
de la figura del delito de femicidio
(O.D. N° 983/12)**

Señor presidente:

En este breve lapso desde que asumí la banca en representación de la provincia de La Rioja, tuve el

gran honor de participar, debatir y votar leyes de gran trascendencia para nuestro país en su conjunto y para mi provincia en particular; leyes que han transformado a nuestra sociedad en una sociedad más justa e inclusiva. Sin embargo, estamos en falta con la sanción de una ley que la comunidad femenina exige a gritos que definamos y sancionemos; es esta ley de tipificación de la conducta penal del delito de homicidio contra una mujer o de quien se autoperciba como tal.

Por eso, como legisladora de una provincia del norte del país, donde los conceptos patriarcales y machistas se encuentran muy arraigados en la sociedad, es un gran honor para mí posibilitar con mi voto el dar respuesta a un reclamo genuino de miles de mujeres que perciben que en algún momento pueden ser víctimas de femicidio.

No es casual tampoco que este dictamen que hoy tratamos sea el primer dictamen que la Comisión de la Banca de la Mujer emite estrenando competencias que recién fueron habilitadas en el reglamento de esta Cámara este año.

La República Argentina ratificó la mayoría de los tratados internacionales de derechos humanos, hemos incorporado la Convención de las Naciones Unidas sobre Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer a la Constitución Nacional en el año 1994 y hemos sancionado en el año 2009 la ley 26.485 sobre protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, no es suficiente para que se establezca que la defensa contra actos de violencia contra la mujer en todas sus expresiones se convierta en verdadera política de Estado. Por eso, depende en gran medida de que nosotras, legisladoras de la Nación y dirigentes en nuestras provincias, nos aboquemos a la elaboración de leyes protectivas del género.

La propuesta que debatirá el Senado trata de poner fin a esta expresión extrema de odio al género, del goce enfermizo que produce en cierta clase de hombres la vulnerabilidad extrema de la mujer cuando no puede defenderse de los acosos, insultos, agresiones físicas y psicológicas que terminan en la violencia extrema de exterminio de esa mujer que no supo o no pudo defenderse, o lo que es más grave aún, que el Estado desatendió por no tener una sanción que exteriorice el reproche penal que para ese delito se necesita tipificar.

Ésta es una gran falencia de nosotros como legisladores, porque estamos actuando cuando los datos estadísticos nos demuestran la gravedad de los hechos. Esta vez vamos detrás de los hechos, cuando nuestra obligación como depositarios del voto popular es adelantarnos a los hechos que dañan a nuestra sociedad, sobre todo a la más vulnerable.

En sociedades como las nuestras, y sobre todo en las del norte del país, como mi provincia de La Rioja, el modelo familiar se construyó siempre sobre una jerarquía interna estructurada en el ejemplo del hombre adulto fuerte, quien siempre está en posición de dominación en relación a su compañera o en relación

al resto de las mujeres. Esta creencia, arraigada en el seno de sociedades machistas, ha perdurado hasta la actualidad permitiendo la validación de acciones que son la mayoría de las veces tomadas como normales. El abuso del poder dominante del hombre sobre la mujer ha permitido que se anide en el inconsciente femenino esa relación de dependencia emocional que parecería habilitar al hombre a sostener conductas absolutamente reprochables, que hacen que se trate a la mujer como una cosa de dominio exclusivo del hombre o de su hombre. Estos conceptos, en estructuras sociales patriarcales, han favorecido que se vulneren los derechos de la mujer hasta llegar a los extremos más graves de violencia de género, como es el asesinato de las mujeres por cuestiones de dominación, superioridad o misoginia extrema.

Es de conocimiento de la comunidad internacional que la defensa de los derechos humanos nos ha ubicado en un lugar de preeminencia en el conjunto de naciones. Debemos lograr que esos derechos humanos puedan ser ejercidos en plenitud por todas las mujeres en todos los ámbitos para poder avanzar en la eliminación de prácticas discriminatorias y denigratorias de género que pueden llevar a la muerte de las mujeres o de las personas que se autoperciban mujeres. Por eso, debemos darle a la sociedad, a las mujeres para ser más explícita, la respuesta que a gritos esperan, lograr una ley que por lo menos reproche penalmente y en forma eficaz el delito de atentar contra nuestras vidas.

Según datos del Observatorio de Femicidios en la Argentina coordinado por La Casa del Encuentro, durante los primeros seis meses del año se perpetraron 119 asesinatos de mujeres, lo que significa que cada tres días dos mujeres fueron asesinadas en el país por el solo hecho de ser mujeres, y en siete de cada diez casos, el presunto agresor resultó el marido o ex pareja de la víctima. Otro dato alarmante es que trece de esas mujeres asesinadas murieron como consecuencia de graves quemaduras, como el recordado caso de Wanda Taddei. Además, según datos del mismo observatorio, 34 de los 119 femicidios fueron perpetrados en la vivienda compartida con el femicida y 25 en la de la víctima.

Con este dictamen que hoy estamos tratando en esta histórica sesión, se prevé la incorporación como delito autónomo en el artículo 80 bis del Código Penal, por el cual se impone prisión perpetua al hombre que mate a una mujer o a una persona que se autoperciba con identidad de género femenino y mediar violencia de género; y también tratamos una importante modificación en el artículo 80 al incluir prisión perpetua para el excónyuge o exconviviente, es decir que incluimos a las parejas o exparejas casadas o no.

Con relación al proyecto que proponía Diputados, el dictamen de este Senado amplía el espectro de sujetos

comprendidos en el agravante por el vínculo en el caso del homicidio (artículo 80 del Código Penal): además del ascendiente, descendiente y cónyuge, agrega al ex cónyuge, al conviviente y al exconviviente. También considera agravante cuando el homicidio se comete por odio –a la orientación sexual, a la identidad de género o a su expresión– o con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o se ha mantenido una relación. Estarían aquí comprendidos los casos de aquellos hombres que matan a los hijos de su pareja.

En los casos de homicidio agravado por el vínculo, se elimina la posibilidad de que un juez beneficie al asesino con una reducción de la pena con la aplicación de figuras como la emoción violenta –si anteriormente hubiera realizado actos de violencia contra la mujer víctima, otra mujer u otra persona que se autoperciba con identidad de género femenino–.

Señor presidente, la violencia de género es un tema fundamental que es materia excluyente de derechos humanos. La perspectiva que debe tenerse sobre el derecho que asiste a toda mujer o a quien se autoperciba como mujer, debe trascender lo doméstico, ya que requiere el compromiso de toda la sociedad para tratar de visibilizar al delito que hoy estamos tipificando con la aprobación del dictamen, como un delito al que debe combatirse con todos los medios con que cuenta el Estado. El objetivo a perseguir es erradicar todo tipo de violencia de género y para eso debemos comprometernos con la defensa de los derechos, en este caso protegiendo a la mujer, con el reproche penal que se pretende para describir este delito.

Para eso, debemos comprometernos a lograr una capacitación permanente en todos los agentes que estén relacionados con la problemática, desde aquellos que toman las primeras denuncias hasta los lugares de alojamiento de las víctimas y sus familias, desde las publicaciones infantiles que afirman conceptos patriarcales, hasta las publicaciones sexistas que estigmatizan y ridiculizan a la mujer. Desde la tipificación correcta de los delitos contra la mujer hasta su efectiva y eficaz aplicación por el Poder Judicial. Debemos decididamente establecer que la defensa de los derechos de la mujer y la erradicación de la violencia de género se sientan, se perciban, y se proclame como una verdadera política de Estado.

En definitiva, señor presidente, se trata de desterrar esa pretensión de dominio que por medio del control o la posesión quieren algunos hombres tener sobre la mujer, basándose en una creencia radicalizada de la superioridad masculina sobre la femenina, que concluye a veces en agresiones de tal entidad que no tan sólo invaden física o psicológicamente el cuerpo de la mujer o de quien se autopercibe como tal, sino que terminan con la vida misma. Debemos, en definitiva, establecer el reproche penal explícito por cuestiones de odio al género por medio de la normativa que estamos debatiendo en esta Cámara.